



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



**TESIS:**

**La proporcionalidad en la determinación judicial de la pena cuando el agente  
tiene entre 18 y 21 años, en el delito de robo agravado**

**Autor:**

**Maldonado Espinoza Christian Jhammes**

**Asesora:**

**Mag. Fernández Palomino Jesús Alicia**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**Fecha de sustentación:**

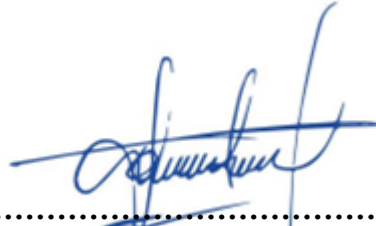
**11 de octubre de 2024**

**LAMBAYEQUE, 2024**

**Tesis denominada “La proporcionalidad en la determinación judicial de la pena cuando el agente tiene entre 18 y 21 años, en el delito de robo agravado” presentada para optar el TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO, por:**

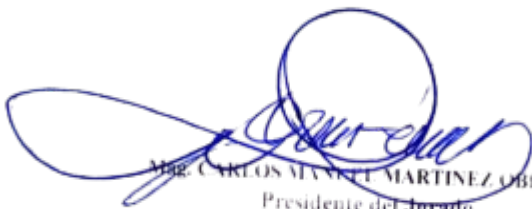


.....  
**Maldonado Espinoza Christian Jhammes**  
**Autor**

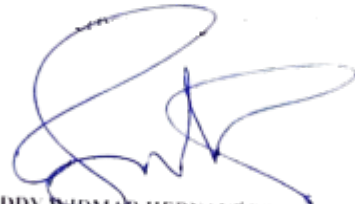


.....  
**Mag. Fernández Palomino Jesús Alicia**  
**Asesora**

**APROBADO POR:**



**Mag. CARLOS MANUEL MARTÍNEZ OBIÑAS**  
**Presidente del Jurado**



**Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO**  
**Secretario del Jurado**



**Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**  
**Vocal del Jurado.**

## **DEDICATORIA**

*A Santos Antonio y Silvia, mis padres; y a Andrea Cristina, mi hermana; por su ejemplo y apoyo insóluto; motivación en todos mis anhelos.*

## **AGRADECIMIENTO**

*A la señora abogada Jesús Alicia Fernández Palomino, mi mentora, por la paciencia para guiar mis pasos en esta investigación, a quien le debo más que gratitud.*

*Al señor doctor Gilmer Alarcón Requejo, excelso profesor, por su gran aporte en los cimientos de esta investigación.*

*A mi Facultad de Derecho y Ciencia Política y a sus catedráticos; por haber sido parte trascendental en mi formación universitaria, la cual llega a su fin con este trabajo.*



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA**  
**UNIDAD DE INVESTIGACION**



**ACTA DE SUSTENTACIÓN**

**A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 86-2024-UI-FDCP**

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Christian Jhammes Maldonado Espinoza**.

Siendo las 6:30 p.m. del día viernes 11 de octubre del 2024 se reunieron en la Sala de simulación de audiencias 1 de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**LA PROPORCIONALIDAD EN LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA CUANDO EL AGENTE TIENE ENTRE 18 Y 21 AÑOS, EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO, PERIODO 2021**". designados por Resolución N° 53-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 26 de enero del 2024, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

**PRESIDENTE** : Mag. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS.

**SECRETARIO** : Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO.

**VOCAL** : Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA

La tesis fue asesorada por Abog. JESUS ALICIA FERNÁNDEZ PALOMINO, nombrada por Resolución N° 53-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 26 de enero del 2024.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° 588-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 03 de octubre del 2024.

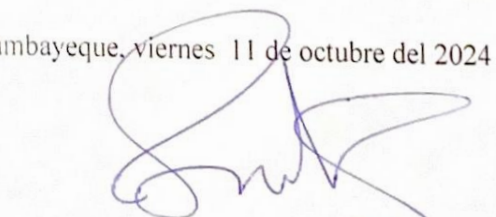
La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Christian Jhammes Maldonado Espinoza** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADO con la nota de 18 (Dieciocho) en la escala vigesimal, mención de MUY BUENO.

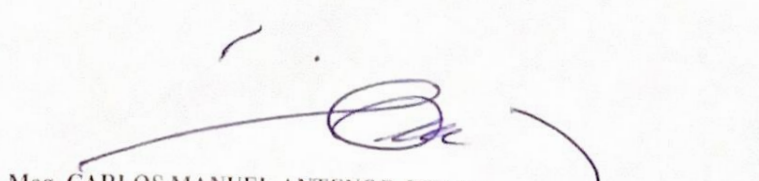
Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de ABOGADO, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las : .m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, viernes 11 de octubre del 2024

  
Mag. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS  
Presidente del Jurado

  
Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO  
Secretario del Jurado


  
Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA  
Vocal del Jurado.

## CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, **Jesús Alicia Fernández Palomino**, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación del tesista en DERECHO **Christian Jhammes Maldonado Espinoza**, Titulada LA PROPORCIONALIDAD EN LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA CUANDO EL AGENTE TIENE ENTRE 18 Y 21 AÑOS, EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 18 % verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 17 de julio del 2024



---

JESÚS ALICIA FERNÁNDEZ PALOMINO

DNI: 16718011

ASESORA



---

CHRISTIAN JHAMMES MALDONADO ESPINOZA

DNI: 73579876

Autor

# CHRISTIAN JHAMMES MALDONADO ESPINOZA. (SÍ).pdf

## INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

17%

FUENTES DE INTERNET

7%

PUBLICACIONES

8%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1

[idoc.pub](#)

Fuente de Internet

3%

2

[hdl.handle.net](#)

Fuente de Internet

3%

3

[qdoc.tips](#)

Fuente de Internet

2%

4

[repositorio.usmp.edu.pe](#)

Fuente de Internet

2%

5

[tesis.ucsm.edu.pe](#)

Fuente de Internet

2%

6

[vsip.info](#)

Fuente de Internet

1%

7

Submitted to Universidad Cesar Vallejo

Trabajo del estudiante

1%

8

[doku.pub](#)

Fuente de Internet

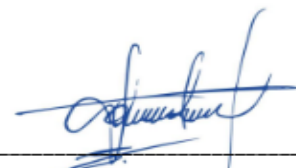
1%

9

[www.juristaeditores.com](#)

Fuente de Internet

<1%



JESÚS ALICIA FERNÁNDEZ PALOMINO

DNI: 16718011

ASESORA





## Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Christian Jhammes MALDONADO ESPINOZA  
Título del ejercicio: INFORMES  
Título de la entrega: CHRISTIAN JHAMMES MALDONADO ESPINOZA. (SÍ).pdf  
Nombre del archivo: CHRISTIAN\_JHAMMES\_MALDONADO\_ESPINOZA.\_SÍ\_.pdf  
Tamaño del archivo: 1.11M  
Total páginas: 135  
Total de palabras: 32,552  
Total de caracteres: 174,126  
Fecha de entrega: 17-jul.-2024 10:07p. m. (UTC-0500)  
Identificador de la entrega... 2418505684

 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

TESIS:

"La proporcionalidad en la determinación judicial de la pena cuando el agente tiene entre 18 y 21 años, en el delito de robo agravado"

Autor:

Maldonado Espinoza Christian Jhammes

Asesor:

Fernández Palomino Jesús Alicia

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de sustentación:

LAMBAYEQUE, 2024

  
JESÚS ALICIA FERNÁNDEZ PALOMINO  
DNI: 16718011  
ASESORA

## INDICE GENERAL

DEDICATORIA .....	3
AGRADECIMIENTO.....	4
INDICE GENERAL.....	5
ÍNDICE DE TABLAS .....	7
RESUMEN.....	8
ABSTRACT .....	9
INTRODUCCION .....	10
CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS .....	12
I. ASPECTOS METODOLOGICOS. ....	12
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. ....	12
1.1. Planteamiento del problema. ....	12
1.2. Formulación del problema.....	14
1.3. Justificación e importancia del estudio.....	14
1.4. Objetivos. ....	16
1.5. Hipótesis.....	17
1.6. Variables.....	17
1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	17
CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL .....	20
I. TRABAJOS PREVIOS.....	20
II. FUNCIONALIDAD DE PENA EN EL PERÚ .....	23
2.1. Teorías de la Pena .....	24
2.2. La pena en la Constitución Política del Perú .....	29
2.3. La pena en el Código Penal peruano .....	29
2.4. La pena en la jurisprudencia peruana .....	30
III. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.....	31
3.1. Principio de Proporcionalidad .....	31
3.3.1. Idoneidad.....	34

3.3.2. Necesidad .....	35
3.3.3. Proporcionalidad en sentido estricto .....	35
IV. DETERMINACIÓN DE LA PENA .....	36
4.1. Etapas en la determinación de la pena.....	36
V. RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA.....	43
5.1. Marco normativo y conceptual.....	43
5.2. Determinación judicial de la pena .....	43
5.3. Política Criminal .....	45
5.4. Tratamiento jurisdiccional.....	49
VI. DELITO DE ROBO AGRAVADO .....	50
6.1. Naturaleza del delito de robo.....	50
6.2. Delito de robo.....	51
6.3. Configuración del delito de robo agravado .....	55
VII. DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO CON RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA.....	62
CAPITULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS .....	64
I. Unidad de análisis de la investigación .....	64
1.1. Población.....	64
1.2. Muestra.....	64
II. Evaluación de ejecutorias supremas sobre determinación judicial de la pena en el delito de robo agravado cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad .....	64
CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.....	117
CONCLUSIONES .....	130
RECOMENDACIONES .....	132
BIBLIOGRAFÍA.....	133

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla n.º01: <i>Resultado de la revisión de las ejecutorias supremas de la Corte Suprema de Justicia de la República sobre determinación judicial de la pena en el delito de robo agravado cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad</i> .....	64
Tabla n.º02: <i>Marco punitivo de delitos contra la vida y dignidad humana</i> .....	119
Tabla n.º03: <i>Criterios asumidos por la Corte Suprema de Justicia de la República para imponer una pena por debajo del mínimo legal cuando el agente cuente con una edad entre 18 y 21 años</i> .....	123
Tabla N.º04: <i>Contrastación y validación de la hipótesis</i> .....	129

## RESUMEN

Esta investigación, tiene por objeto establecer si al momento de determinar judicialmente la pena, por debajo del mínimo legal cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado, se tienen en cuenta criterios que garanticen la observancia del Principio de Proporcionalidad.

Para dicho propósito la investigación tiene un diseño no experimental; en donde la población está constituida por las ejecutorias supremas de la Corte Suprema de Justicia de la República sobre el delito de robo agravado, expedidas en el 2022; por lo que la muestra la conforman 50 de dichas ejecutorias en los que el agente cuente con una edad entre 18 y 21 años. Además, se empleó las técnicas de análisis documental y observación, así como los instrumentos de ficha y guía de observación.

El resultado obtenido fue que en gran parte de las ejecutorias supremas solo se valora la edad del agente para rebajar la pena, mientras que en otras ejecutorias se valoran criterios, tales como los antecedentes penales, las circunstancias en las que se produjo el hecho, el grado de afectación a la víctima o las condiciones personales del agente.

En tal sentido, se puede concluir que no existen de criterios uniformes en la determinación de la pena por debajo del mínimo legal, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado; por lo que, no se aplica el Principio de Proporcionalidad, ya que la pena se impone de forma mecanizada o espontánea, sin que medien circunstancias que puedan ser valoradas por el juzgador.

**Palabras claves:** Determinación judicial de la pena, Principio de Proporcionalidad y robo agravado.

## **ABSTRACT**

The purpose of this research work is to establish whether at the time of judicially determining the penalty, below the legal minimum when the agent is between 18 and 21 years of age, in the crime of aggravated robbery, criteria are taken into account that guarantee the observance of the Principle of Proportionality.

For this purpose, the research has a non-experimental design; where the population is constituted by the supreme executory orders of the Supreme Court of Justice of the Republic on the crime of aggravated robbery, issued in 2022; so the sample is made up of 50 of these executions in which the agent is between 18 and 21 years old. In addition, documentary analysis and observation techniques were used, as well as the instruments of the observation card and guide.

The result obtained was that in most supreme executions only the age of the agent is assessed to reduce the sentence, while in other executions criteria are assessed, such as criminal record, the circumstances in which the act occurred, the degree of affectation to the victim or the personal conditions of the agent.

In this sense, it can be concluded that there are no uniform criteria in the determination of the penalty below the legal minimum, when the agent is between 18 and 21 years of age, in the crime of aggravated robbery; therefore, the Principle of Proportionality does not apply, since the penalty is imposed in a mechanized or spontaneous manner, without circumstances that can be assessed by the judge.

**Keywords:** Judicial determination of the penalty, proportionality and aggravated robbery.

## INTRODUCCION

El Código Penal otorga la facultad al juzgador de imponer una pena por debajo del extremo mínimo del marco punitivo de un ilícito penal, cuando el agente tenga entre 18 y 21 años de edad, reducción que debería ajustarse al Principio de Proporcionalidad, a fin de alcanzar una pena justa con relación a los hechos cometidos; aún más cuando se trate de un ilícito penal sobrepenalizado, como es el delito de robo agravado; ya que la política criminal, debido a su alto índice comisivo, ha creído conveniente aumentar paulatinamente el marco punitivo hasta llegar a un extremo sumamente alto con respecto a otros delitos cuya protección de bienes jurídicos debe ser mayor, además tal política criminal a la vez restringido la aplicación de circunstancias que puedan atenuar el alto marco punitivo establecido.

Entonces, un problema trascendental surge en la materialización del Principio de Proporcionalidad, por cuanto la legislación peruana no reguló los criterios a valorar para garantizar la aplicación del referido Principio, aspecto que se pone de manifiesto cuando un agente cuente con responsabilidad restringida, es decir cuente con una edad entre 18 y 21 años, debido a que nuestro Código Penal no limita el quantum a rebajar de la pena, lo que permite intuir que el juzgador reduce la pena atendiendo solamente a su discrecionalidad; por consiguiente, tras un examen exhaustivo de las ejecutorias supremas de la Corte Suprema de Justicia de la República expedidas en el 2022, cuando se presentan tales circunstancias, se proponen criterios a valorar para garantizar la aplicación del Principio de Proporcionalidad.

Por tal razón, en esta investigación, en el Capítulo I se desarrollan los aspectos metodológicos considerados en el transcurso de la investigación.

Posteriormente, en el Capítulo II, referido a Marco Conceptual, se exponen los trabajos previos en los que se sustenta esta investigación, asimismo se abordan los siguientes tópicos: Funcionalidad de las Penas en el Perú, Principio de Proporcionalidad, Determinación de la Pena, Responsabilidad Restringida, Delito de Robo Agravado, para

culminar exponiendo la Determinación Judicial de la Pena en el delito de robo agravado con responsabilidad restringida.

En el Capítulo III, se presenta el análisis y resultados de la investigación, puesto que de forma detallada se presenta la muestra de la investigación y su correspondiente evaluación; lo cual, permite dar pie al Capítulo IV, referido a la contrastación de Hipótesis, para finalmente arribar a las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

## **CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS**

### **I. ASPECTOS METODOLOGICOS.**

#### **1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.**

##### **1.1. Planteamiento del problema.**

El interés investigativo del presente trabajo, se avoca en estudio de la determinación judicial de la pena, bajo parámetros estrictos del Principio de Proporcionalidad, Principio establecido en el Artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, instituyendo que la pena a imponer no debe sobrepasar al hecho cometido.

Previamente es menester señalar que, nuestra Constitución Política (1993), establece para el Poder Legislativo la exención de prever una conducta con reproche penal, establecerla como tal, y señalar la sanción que le corresponde. De esta manera, otorga la prerrogativa de persecución, investigación y acusación de la comisión de tales conductas punibles, de manera hegemónica y monopólica, al Ministerio Público; así también, se prevé a través del Poder Judicial la aplicación de la pena respectiva.

En ese sentido, el juzgador tendrá la obligación de determinar la pena concreta a aplicar, dentro de un extremo mínimo y máximo otorgado por Ley, bajo los principios que guían el derecho penal, tal como el Principio de Proporcionalidad; sin embargo, el legislador a lo largo de los años ha creído conveniente, a fin de combatir la inseguridad ciudadana, ejercer el poder punitivo estatal en extenso, aumentando la punibilidad de los delitos o restringiendo la disminución del *quantum* de la pena en su determinación judicial.

En atención a lo indicado, tenemos que, para el delito de robo agravado en el Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo n.º 635 y publicado el 08 de abril de 1991, se estableció una pena abstracta

comprendida entre un extremo mínimo de 03 años y un máximo de 08 años; sin embargo, en la actualidad, adicionando nuevas modalidades al tipo penal primigenio, se le ha consignado una pena abstracta de 12 a 20 años, lo cual supondría una notable desproporcionalidad en relación con delitos en los que el bien jurídico protegido debería ser de mayor protección, verbigracia: el delito de homicidio que tiene como extremo mínimo el de 06 años y máximo de 20 años.

Por otro lado, no debemos soslayar que, el Código Penal en su artículo 22° estableció que cuando la edad del agente se encuentre comprendida entre 18 y 21 años o más de 65 años, se podrá prudencialmente disminuir la pena, figura jurídica conocida como «Responsabilidad Restringida por la Edad»; no obstante, el 19 de agosto de 2013 mediante Ley n.º30076 se limitó su aplicación para el delito de robo agravado.

Frente a ello, la Corte Suprema de Justicia de la República, para al delito de robo agravado, mediante el Acuerdo Plenario n.º04-2016/CIJ-116, apartándose de la Ley, estableció no aplicar la limitación antes expuesta, por cuanto la imposición de una pena por debajo del extremo mínimo, incide en la evolución o madurez del agente, mas no en las particularidades o la gravedad del injusto penal.

Siendo así, al ser de aplicación la responsabilidad restringida por la edad en el delito de robo agravado, bajo la discrecionalidad del juzgador, ésta debería ser proporcionalidad frente al hecho cometido; sin embargo, la materia bajo cuestionamiento sería el cómo garantizar o alcanzar dicha proporcionalidad si el marco punitivo, como se señaló anteriormente, es sumamente elevado con respecto a otros ilícitos penales.

Aún más, cuando para la Corte Suprema de Justicia de la República la discrecionalidad del juez para la determinación una pena concreta por debajo del mínimo legal ante la responsabilidad restringida por la edad en el delito de robo agravado, no es un tema sobre el cual haya uniformidad

de criterios; en tanto que, en la Casación n.º 1239-2022/La Libertad, la Sala Penal Permanente precisó que la responsabilidad restringida atiende a la prudencia del juzgador, el cual deberá seguir criterios racionales teniendo en cuenta la proporcionalidad establecida en el artículo VIII del Título Preliminar y no respondiendo a criterios legales, tasados o predeterminados; no obstante, en la Casación n.º 308-2020/Ica, la misma Sala Suprema sostiene que dicha reducción debe realizarse hasta un límite máximo de un tercio del mínimo legal. Por su parte la Sala Penal Transitoria, en el Recurso de Nulidad n.º 522-2020/ Callao recogiendo el pronunciamiento de la Sentencia de Casación N°237-2019/Puno, precisa que la reducción de la pena será mayor si el agente está más próximo a los 18 años, siendo lo contrario si su edad está próxima a los 21 años.

Como se observa, dentro de la Corte Suprema de Justicia de la República existe divergencia de criterios en cuanto a la determinación judicial de la pena concreta por debajo del extremo mínimo en el delito de robo agravado, cuando el agente se encuentre en circunstancias de responsabilidad restringida por la edad, en estricto cuando su edad esté comprendida entre 18 y 21 años –jóvenes-adultos–, por lo que esta investigación planea enfocarse en dichas divergencias, para sobre ellas establecer criterios que permitan garantizar el principio de proporcionalidad en la determinación judicial de la pena concreta por debajo del mínimo legal respectivo.

## **1.2. Formulación del problema.**

¿Cómo influye la proporcionalidad, en la determinación de la pena concreta, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado?

## **1.3. Justificación e importancia del estudio.**

### **1.3.1. Justificación del estudio.**

El estudio, se centra en la incidencia del Principio de

Proporcionalidad en la determinación judicial de la pena, como aspecto de observancia obligatoria para la aplicación de una pena justa, ya que ésta tendrá en cuenta la gravedad y los consecuentes daños del hecho producido, además que con dicho principio se garantiza la funcionalidad de la pena en un Estado de Derecho y por consiguiente protege derechos humanos.

En estricto, esta investigación tiene como justificación la observancia del Principio de Proporcionalidad cuando la ley penal establece la imposición de penas por debajo del marco punitivo establecido; es el caso, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad –responsabilidad restringida por la edad– la pena concreta responde necesariamente a la discrecionalidad del juez; sin embargo, la Ley penal –en específico– no prevé criterios sobre los cuales dicha discrecionalidad deba ejercerse para imponer una pena concreta proporcional, circunstancias a las cuales no son ajenos los pronunciamientos de Corte Suprema de Justicia de la República, como se advierte en sus ejecutorias supremas; en tanto que, son diferentes los criterios sobre los cuales se merita el *quantum* de una pena concreta cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad, tanto más, si nuestros legisladores a lo largo de los años, han aumentado el marco punitivo en diferentes delitos – como se advierte del delito de robo agravado –, dejando de lado la funcionalidad de la pena y, aún más, limitando figuras que permiten su atenuación, sobre esto último la Corte Suprema de la República bajo el principio de igualdad ha considerado inaplicar para el caso del delito de robo agravado tal limitación; por lo cual, el asunto en cuestión sería cómo se deberá determinar la pena por debajo del extremo mínimo legal, en el delito de robo agravado, de manera que encuentre proporcionalidad, aspecto sobre el cual, esta investigación se avoca en estudio.

### **1.3.2. Importancia del estudio.**

Con la investigación se pretende identificar los criterios con los que los operadores de justicia ejecutan su discrecionalidad en la imposición de una pena por debajo del extremo mínimo legal, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad – responsabilidad restringida por la edad–, en delito de robo agravado –delito sobrepenalizado–.

Así, se determinaría que el Principio de Proporcionalidad es trascendental en dicha labor jurisdiccional; en tanto que, garantiza la aplicación de una pena justa, acorde a la funcionalidad de la pena en nuestro ordenamiento jurídico y respetando derechos humanos.

## **1.4. Objetivos.**

### **1.4.1. Objetivo General.**

Establecer si al momento de determinar judicialmente la pena, por debajo del mínimo legal, en el delito de robo agravado, se tienen en cuenta criterios que garanticen la observancia del Principio de Proporcionalidad, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad.

### **1.4.2. Objetivos Específicos.**

- Analizar la configuración, marco punitivo y política criminal del delito de robo agravado en nuestro país.
- Determinar la aplicación del principio de proporcionalidad, en materia penal y su vinculación con la funcionalidad de la pena.
- Establecer la falta de uniformidad en los criterios utilizados para la determinación de una pena concreta por debajo del extremo mínimo legal, cuando el agente tenga entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado.
- Proponer el uso de criterios uniformes para la determinación

de la pena concreta por debajo del extremo del mínimo legal, cuando el agente tenga entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado.

### **1.5. Hipótesis.**

Si no se aplican criterios para determinar judicialmente la pena por debajo del mínimo legal cuando el agente tiene una edad comprendida entre los 18 y 21 años, en casos de delito de robo agravado, entonces se transgrede el Principio de Proporcionalidad.

### **1.6. Variables.**

#### **1.6.1. Variable independiente.**

Determinación judicial de la pena, en el delito de robo agravado, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad.

#### **1.6.2. Variable dependiente.**

Proporcionalidad de la pena.

### **1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.**

#### **1.7.1. Métodos.**

##### **1.7.1.1. Métodos generales.**

- **Método exegético jurídico**, en tanto que hace referencia a la interpretación literal y gramatical de la ley, por lo que será necesario comprender la normativa que regula la judicial de la pena, la responsabilidad restringida por la edad, el Principio de Proporcionalidad y el delito de robo agravado.
- **Método sistemático jurídico**, comprendido como el método mediante el cual se analiza a la norma jurídica de forma conjunta con el sistema u ordenamiento jurídico, lo que permitirá

comprender la relación-vinculación entre la determinación judicial de la pena y la proporcionalidad con el hecho.

- **Método deductivo**, este método parte de una hipótesis general y luego se concreta a través de deducciones específicas para comprobar o refutar, lo que permite establecer –en la presente investigación–, una hipótesis que se comprobará en el transcurso de la investigación.
- **Método inductivo**, el cual parte de la observación de circunstancias y aspectos específicos para llegar a conclusiones generales, ello permitirá en la investigación demostrar la hipótesis, así como determinar conclusiones y recomendaciones.

#### **1.7.2. Técnicas.**

- **Análisis Documental:** Se emplearán fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, entre otros recursos, con el fin de recopilar información de archivos, textos publicados en el campo del Derecho Penal y jurisprudencia. Este enfoque se centrará específicamente en la responsabilidad restringida por la edad y en la proporcionalidad en la determinación judicial de las penas.
- **Observación:** Se hará uso de una guía de observación para examinar la realidad socio-jurídica que abarca la necesidad de ejercer el control social. La función de esta guía será evaluada a lo largo del desarrollo doctrinal y jurisdiccional.

#### **1.7.3. Instrumentos.**

- **Ficha**, como dispositivo empleado en la práctica del fichaje, cuya finalidad es facilitar la ubicación de fuentes y almacenar la información recolectada durante la investigación.

- **Guía de observación**, diseñada para llevar a cabo una observación directa no participante del objeto de investigación en relación con la doctrina y la actividad jurisdiccional.

## CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

### I. TRABAJOS PREVIOS

Para lograr un desarrollo adecuado en la investigación, se han de tomar en cuenta las contribuciones de estudios anteriores en temas relacionadas con el que ahora abordamos.

Al respecto, en el **plano internacional** se ha logrado ubicar las siguientes investigaciones:

Giraldi (2020) con el artículo denominado “Política, discrecionalidad y Derecho en las implicaciones empíricas del principio de proporcionalidad de la pena”, en la Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia de la Universidad de Armenia – España.

El estudio fue enfocado en las implicancias empíricas del principio de proporcionalidad en el marco punitivo, desarrollando un análisis en la predeterminación normativa de la proporcionalidad, como su aplicación en la fase del juicio y la en la fase de ejecución de la pena, analizando la política, discrecionalidad y el Derecho penal.

Sostiene que, el Principio de Proporcionalidad refleja inestabilidad y mutabilidad porque las circunstancias en cada caso varían y no permiten una evaluación homogénea de las normas para contar con una proporción entre el delito y la pena; la motivación de las decisiones jurisdiccionales y el derecho de defensa son las técnicas que parcialmente limitan el exceso de la discrecionalidad del juez, a la hora de la imposición de una pena. Por lo que, con el juicio de proporcionalidad se garantiza la limitación a la discrecionalidad judicial porque se centra en la contraposición entre el delito y la pena, teniendo en cuenta además la reparación del daño.

Basso (2021) con artículo “Proporcionalidad cardinal y proporcionalidad ordinal en la determinación judicial de la pena” en la Revista *InDret*.

Esta investigación presenta una nueva teoría dotando de relevancia a consideraciones sistemáticas en la imposición de la pena, definiendo al mismo tiempo la magnitud de

punición relacionada estrictamente con la gravedad del hecho, parte de las aportaciones de Von Hirsch, en cuanto a proporcional cardinal y ordinal conduciendo a una interpretación restrictiva por parte de los juzgadores, exigiéndose motivación frente a cualquier desviación mínima de punición legalmente prevista.

Así, también, a **nivel nacional** se han logrado ubicar las siguientes investigaciones:

Avila Sequeiros (2019) en la investigación denominada “Determinación judicial de la pena en casos de concurrencia de circunstancias privilegiadas”, presentada ante la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco para optar el grado académico de maestro en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal.

Dicha investigación se enfocó en la determinación judicial de la pena, a fin de identificar si esta responde a la política criminal del Estado, favoreciendo la finalidad de prevención; en tal sentido su propósito se enfocó en identificar los límites para la disminución de la pena cuando concurren circunstancias atenuantes privilegiadas. Investigación seguida bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptiva–explicativa y propositiva, con estudio en la Corte Superior de Justicia del Cusco.

La investigación consideró como atenuante privilegiada a la responsabilidad restringida por la edad, y en esencia establece que la determinación judicial de la pena, está sometida a un criterio discrecional del juez, debido a que la norma penal no establece límites o parámetros para su imposición, tanto más, cuando no existe jurisprudencia vinculante al respecto, siendo así en muchos casos se lesionan principios de prevención de la pena, además de los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, ya sea por exceso o por defecto.

Velásquez Fernández (2021) con la investigación titulada “El principio de proporcionalidad en la determinación judicial de la pena privativa de libertad, en el Distrito Judicial de Arequipa, año 2019” presentada ante la Universidad San Martín de Porres para optar el grado de Maestra en Derecho en Ciencias Penales.

El objetivo de estudio consistió en el análisis de la implicancia del principio de proporcionalidad en la determinación judicial de la pena, por cuanto gracias a ella es permisible la reducción de la pena; en tal sentido, la investigación se llevó a cabo mediante el análisis de sentencias condenatorias emitidas durante los meses de enero a julio del 2019 por los Juzgados Penales Colegiados de Arequipa.

Concluyendo que, el órgano jurisdiccional debe aplicar el principio de proporcionalidad al momento de determinar la pena a imponer, a fin de alcanzar una pena proporcionada y por ende justa, en tanto que sería posible apartarse del extremo mínimo punitivo cuando se afecten derechos fundamentales. Además, concluye que los jueces colegiados de Arequipa han empleado criterios diversos al aplicar este principio, con prevalencia en la reparación del daño.

Así también, refiere Córdova Salazar (2021) en la investigación “Límite de reducción de la pena en las atenuantes privilegiadas”, presentada ante la Universidad Privada Antenor Orrego para obtener el título profesional de Abogado.

El objetivo de esta investigación estuvo en determinar el criterio que establezca el límite de la reducción de la pena cuando se esté frente a atenuantes privilegiadas, considerando a la responsabilidad restringida dentro de ellas; concluyendo que tal criterio jurídico es la equiparación a la confesión sincera, en tal sentido la reducción debe ser hasta una tercera parte por debajo del extremo mínimo legal, lo cual reduciría los márgenes de indeterminación judicial al momento de imponer la pena concreta.

Hinostroza Castro y Cueto Soto (2022), en la investigación “Ausencia normativa de las circunstancias atenuantes privilegiadas y su incidencia en la determinación judicial de la penal, Huancayo 2021”, presentada ante la Universidad Peruana Los Andes para optar el título profesional de Abogado.

Investigación realizada bajo el objetivo de establecer cómo la ausencia normativa de circunstancias atenuantes privilegiadas incide en la determinación judicial de la pena en la ciudad de Huancayo en el año 2021; por tal motivo se usó el método general deductivo–inductivo.

En ese sentido, se concluyó señalando que la ausencia normativa de circunstancias atenuantes privilegiadas incide en el quantum de pena a imponer, ya que se realiza de manera mecánica y a discrecionalidad del Juez al no haber una clasificación de las circunstancias atenuantes privilegiadas, limitándose a recurrir a un criterio común al momento de imponer la pena concreta; por tanto que, se prevé la reducción prudencial de la pena sin distinguir como causales de disminución de punibilidad, que al final operativamente tiene los mismos efectos, como es el caso de la responsabilidad restringida.

En el **plano local**, se ha considerado el siguiente trabajo de investigación:

Malca Roque (2019), con la investigación “Aplicación del principio de proporcionalidad en el derecho penal como instrumento para la motivación de la determinación de la pena”, presentado ante la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el grado de Maestro en Derecho con Mención en Ciencias Penales.

Esta investigación tuvo como propósito determinar si existe motivación cuando se aplica el principio de proporcionalidad en la determinación judicial de la pena, investigación bajo los métodos descriptivo, exegético e inductivo, llegando a la conclusión que para determinar la pena a imponer, el Principio de Proporcionalidad es fundamental porque permite que el juez sea justo en su decisión, por lo que se debe tener en cuenta al momento de la motivación de las resoluciones judiciales.

## **II. FUNCIONALIDAD DE PENA EN EL PERÚ**

La concepción genuina de una sociedad determina la organización de un Estado, su forma de gobierno y el grado de sometimiento, puesto que tiene a su cargo la administración de los recursos públicos, la administración del ordenamiento jurídico y la administración de justicia, por lo que goza de potestades imperativas para mantener la armonía social, como es la potestad punitiva, mediante la cual se imponen sanciones a las personas que infrinjan la ley penal, dichas sanciones pueden ser penas o medidas de seguridad, su imposición como su graduación dependerán de la concepción que el ordenamiento jurídico les asigne.

Siendo así, para el maestro Muñoz Conde (2001), la pena es a un mal que se impone por la comisión de un delito; sin embargo, para el maestro Jakobs (1997) resulta ser la exposición de utilidad de la norma a costa del agente que cometió un ilícito penal, ya que, su finalidad se cumplirá con la estabilización de la norma que lesionó.

Como se advierte, se tratan de concepciones totalmente divergentes, y así como ellas muchos estudiosos del Derecho, en especial del Derecho Penal, han postulado diferentes conceptos para la pena y su finalidad en un ordenamiento jurídico; postulados que constituyen la construcción de diversas Teorías de la Pena.

## **2.1. Teorías de la Pena**

Las Teorías de la Pena se distinguen en dos corrientes con planteamientos antagónicos: Idealistas y Utilitaristas; de las que se desprenden Teorías Absolutas y Teorías Relativas, correspondientemente, las primeras prevén a la pena con un fin en sí misma, mientras que las segundas están vinculadas a la satisfacción de una necesidad social (García Caveró, 2019).

### **2.1.1. Teorías Absolutas**

Las Teorías Absolutas también denominadas Teorías de la Justicia o de la Expiación son las más antiguas, perciben a la pena como retribución a la infracción de la ley penal, su fin se encuentra en sí misma y está desvinculado de un efecto social (Roxin, 1997).

El castigo de la infracción de la norma penal es justificado desde muchos razonamientos, el primero de ellos es la **fundamentación religiosa**, en el que se parte de la existencia de correspondencia entre la exigencia religiosa de justicia divina y la función de la pena (Mir Puig, 2006).

Otros aspectos de justificación se dan en el aspecto ético y jurídico, la **fundamentación ética** es sostenida por el alemán Kant, quien en sus postulados se aleja de ver al hombre como instrumento para fines utilitarios de la sociedad; pregonando un fin en sí misma y la necesidad ética como un

«imperativo categórico», obligación incondicionada de la justicia (Muñoz Conde F. , 2015); bajo esta teoría, el hombre no puede ser visto como un instrumento para alcanzar en la sociedad fines específicos (metas preventivas), la pena no puede ser más que el castigo por la infracción de la ley penal, para ejemplificar estos postulados podríamos decir que nos encontramos frente al muy conocido Principio del Tali3n; tanto más si para Kant debe existir pena incluso cuando no exista ni Estado, ni sociedad (Roxin, 1997).

En cuanto a la **fundamentación jurídica**, postulada por Hegel, si bien sigue la línea de Kant en no reconocer metas preventivas en la sociedad bajo la utilización del hombre, se distingue en el extremo de la necesidad de la pena, se presenta aquella como la *“negación del delito y afirmación del derecho”* (Muñoz Conde F. , 2015, pág. 71); es decir, *“la pena es la afirmación del derecho que, fue negado por el delito, negación que solo se contesta con otra negación, que es la pena, la pena es la negación de la negación del derecho”* (Bramont-Arias Torres, 2002, pág. 96).

Un aspecto que no debemos soslayar, es el referente a que estas teorías tienen como base la exigencia incondicionada de justicia, sin extenderse a depender de conveniencias de utilidad social de acuerdo a las circunstancias en las que se da en cada caso, por lo que la pena se impone con un carácter totalmente absoluto, y de allí su nombre, de ello podríamos evidenciar la aplicación del Principio de Proporcionalidad entre la acción que cometió el agente y la consecuencia jurídica que se aplicaría, lo cual representa un límite de garantía para el penado (justa de retribución), por cuanto, lo que se pretende es garantizar y proteger la dignidad humana, como principio-derecho de toda persona; no obstante, la no acogida de estas teorías tanto en el derecho penal como en la doctrina penal, se da porque los Estados modernos se han alejado de la concepción de hacer justicia en la tierra, deslingándose de aspectos puramente relativos a la moral, ética o religión; acogándose a la fuerza jurídica para dichos efectos, por ejemplo: Los

Estados ya no se pronuncian en el nombre de Dios, sino en el nombre del pueblo (Mir Puig, 2006), es criticable, también, que se conciba un solo tipo de valores, sin permitirse el libre albedrío, por cuanto se castiga la acción sin determinar las circunstancias en que se produjo (Bramont-Arias Torres, 2002).

### **2.1.2. Teorías relativas de la pena**

Las Teorías Relativas conciben a la pena como un medio de prevención, convirtiéndose en un mecanismo de protección a la sociedad (Bramont-Arias Torres, 2002), es decir, lo que se busca es prevenir la comisión de ilícitos penales, entonces la pena se convierte en un instrumento de defensa de determinados provechos sociales (función utilitarista), en ese sentido podría decirse que si la retribución se enfoca en el pasado, la prevención lo hace en el futuro.

Estas teorías, a partir de los postulados del jurista y filósofo alemán, Paul Johann Anselm Ritter Von Feuerbach, se dividen en Teorías de Prevención General y Especial (Mir Puig, 2006).

#### **2.1.2.1. Teorías de Prevención General**

El maestro Bacigalupo Zapater (1996) citando al alemán Feueberbach sostiene que la pena es *“(...) una preocupación del Estado que se hace necesaria por el fin de la sociedad que aquel que tenga tendencias antijurídicas, sea impedido psicológicamente de motivarse según estas tendencias”* (pág. 13); la amenaza de la pena tendría la función de disuadir la comisión de nuevos ilícitos penales en la sociedad; siendo así, estas teorías conciben la posibilidad de educar a la persona que delinte mediante una adecuada intervención sociopedagógica; con ello, coinciden con lineamientos humanistas, sociales, racionales y utilitaristas. (Bramont-Arias Torres, 2002).

La pena bajo esta teoría se distingue en dos aspectos, uno positivo y otro negativo.

El **aspecto positivo**, denominado prevención estabilizadora o integradora, se presenta como protección de la vigencia de la norma, por tanto, la pena tiene por finalidad ejercitar confianza hacia ella, fidelidad al Derecho; en ese sentido, el fin de la pena recae en toda la sociedad y no solo en un sector de aquella (potenciales delincuentes); puesto que el delito es entendido como una comunicación defectuosa para el imputado de la ley penal. (Jakobs, 1997), el maestro Bramont-Arias Torres, siguiendo los postulados del maestro Jakobs señala que, “*(...e)l derecho penal restablece en el plano de la comunicación la vigencia perturbada de la norma cada vez que se lleva a cabo seriamente un procedimiento como consecuencia de una infracción de la norma (esto representa la identidad de la sociedad modificada)*” (pág. 100), de estas teorías se pueden distinguir tres efectos: 1) Aprendizaje; 2) Confianza en la norma por la población por la actividad de justicia penal y 3) Pacificación. (Roxin, 1997).

El **aspecto negativo**, denominada prevención intimidatoria, para el maestro Feubach, la pena es la «coacción psicológica», puesto que con la amenaza de su imposición se logra influir sobre potenciales delincuentes, intimidándolos, atemorizándolos, disuadiéndolos para la no comisión de ilícitos penales, dicha intimidación debe someterse a límites, tales como la aplicación del Principio de Proporcionalidad y de Culpabilidad (Luzón Peña, 2012), un claro ejemplo de esta teoría es la cadena perpetua; ya que, su fin es intimidar a los ciudadanos para no cometan delitos. Esta teoría cae en el terror y el totalitarismo, usando al miedo como instrumento y tratando a las personas como animales (Bramont-Arias Torres, 2002), aún más cuando no existe un criterio de

proporcionalidad para la aplicación de las penas en concreto; por consiguiente, la finalidad que se busca puede llegar a extremos ilimitados.

#### **2.1.2.2. Teorías de Prevención Especial**

Las Teorías de Prevención Especial buscan apartar al delincuente de la comisión de futuros delitos, ya sea desde su corrección y educación o mediante su aseguramiento (Muñoz Conde F. , 2001), el máximo exponente de esta teoría es el maestro Franz Von Liszt (1994/2014), quien considera que: *“Al delincuente debe retribuírsele según su valor para el ordenamiento jurídico; su valor jurídico reside en la desviación del equilibrio de la fuerzas que determinan la vida estatal, en la conmoción del ordenamiento jurídico; conforme a ello la retribución consiste en la reconstrucción del equilibrio, en el aseguramiento del orden jurídico. La pena de protección es la pena retributiva”* (pg. 51).

Entonces, la imposición de una pena, bajo los parámetros de estas teorías, tiene por finalidad servir como escarmiento o camino a la readaptación social (resocialización), esta teoría opera en la ejecución de la pena (Mir Puig, 2006); por ello, cuenta con una triple dimensión: 1) Intimidación, 2) Resocialización y 3) Inocuización, esta última siempre que el agente sea habitual en la comisión de ilícitos penales e incorregible, por lo que se propugna por la anulación de dicho sujeto de la sociedad; se trata al delincuente como un enfermo que necesita de un tratamiento terapéutico, empero, no se tiene en cuenta ni se puede determinar el tiempo del referido tratamiento. (Bramont-Arias Torres, 2002)

### 2.1.3. Teorías Mixtas de la pena

Habiendo conocido los postulados antes expuestos, los doctrinarios iniciaron por buscar una teoría ecléctica, tendencia que fue iniciada por Adolf Merkel a fines del Siglo XIX, entendiendo que la retribución y la prevención, tanto general como especial, forman aspectos o lados distintos de la pena, se parte de una idea de retribución añadiéndose fines preventivos, denominándose también Teoría de la Unión (Mir Puig, 2006), siendo así la pena será completamente legítima si es justa y útil. (Bacigalupo Zapater, 1996).

El maestro Roxin (1997) ha precisado que la teoría mixta, ecléctica o de la unión, tiene como base el entendido de que: *“(...) ni la teoría de la retribución ni ninguna de las teorías preventivas pueden determinar justamente por si solas el contenido y los límites de la pena (...)”* (Pág. 94).

## 2.2. La pena en la Constitución Política del Perú

El Estado peruano es un Estado democrático de derecho, de conformidad al artículo 43° de la Constitución Política del Perú, razón por la cual no podría establecer una aplicación constitucional de los postulados de las Teorías Absolutas, tanto más si el inciso 22° del artículo 139° del mismo cuerpo normativo precitado, sostiene que *“(...) el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”*, por tanto estaríamos frente a la segunda corriente, siendo estas las Teorías Relativas o de prevención.

## 2.3. La pena en el Código Penal peruano

Ahora bien, el Código Penal prevé en su Título Preliminar, lo siguiente: *“Artículo I. Este Código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. (...) Artículo IX. La pena tiene función preventiva, protectora y resocializador. (...)”*, por lo cual se condice con

la norma constitucional, al rechazan las teorías absolutas, adoptándose criterios preventivos.

#### **2.4. La pena en la jurisprudencia peruana**

En la Sentencia recaída en el Expediente N°803-2003-HC/TC, del 30 de noviembre de 2004, el Tribunal Constitucional, consideró que:

*“(…) nuestro ordenamiento ha constitucionalizado la denominada teoría de la **función de prevención especial positiva**, al consagrar el principio según el cual, el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penal a la sociedad (...) los fines preventivos de la pena plantean un Derecho Penal vinculado a la evitación de delitos (...) como tarea primaria de la legislación punitiva, en tanto que los fines de protección asignados se relacionan con la tutela de bienes jurídicos, sean personales o colectivos.”* (fundamento jurídico 9° y 14°).

Concepción que se mantiene a la fecha, como es verse de la Sentencia de fecha 07 de marzo de 2024, recaído en el Expediente N°05224-2022-HC/TC Puno, por cuanto señaló: *“(…) el régimen penitenciario debe condecirse con la prevención especial de la pena que hace referencia al tratamiento, resocialización del penal (reeducación y rehabilitación) y a cierta flexibilización de la forma en que se cumple la pena, lo cual es acorde con lo señalado en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución (...)*”; además, tomando en consideración las sentencias recaídas en los Expedientes 02590-2010-PHC/TC, 03405-2010-PHC/TC Y 00212-2012-PHC/TC, precisa que: *“(…) la prevención general de la pena obliga al Estado a proteger a la nación contra daños o amenazas a su seguridad, lo que implica la salvaguarda de la integridad de la sociedad que convive organizada bajo la propia estructura del Estado, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, que establece que es deber del Estado proteger a la población de las amenazas a su seguridad”*.

Por su parte la Corte Suprema de la República, en el Recurso de Nulidad N°1486-2017/Santa de fecha 05 de abril de 2018 , en cuanto a la determinación de la pena a imponer, señaló que las razones de prevención general, tales como el delito en sí y el acuerdo de voluntades, no son superiores a la prevención especial, que comprende la personalidad del imputado; es decir, establece el reconocimiento de las Teorías de Prevención, y dota de igualdad a sus dos vertientes en nuestro ordenamiento jurídico.

Así, se advierte de lo antes expuesto, que el ordenamiento jurídico peruano se acoge a Teorías Relativas de la pena, por cuanto los fines que se pretenden alcanzar sobrepasan a la retribución del ilícito penal, con la aplicación de una pena se busca además la resocialización, reeducación y reincorporación del penado en sociedad, en esa esperanza de que el agente pueda someterse nuevamente al imperio de la Ley y vivir con fidelidad hacia ella, garantizando y protegiendo derechos fundamentales.

Ahora bien, advertida la finalidad que se pretende alcanzar con la imposición de una pena, surge una nueva interrogante: ¿Cómo determinar una pena justa?, para lo cual, el Derecho Penal a dotado de principios y reglas procesales para la imposición de una pena buscando la aplicación de una pena justa por parte de los jueces, un principio trascendental para ello es el Principio de Proporcionalidad.

### **III. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD**

#### **3.1. Principio de Proporcionalidad**

El reconocimiento del contenido de los derechos fundamentales por un Estado, implica la presencia de dos aspectos trascendentales, el primero referido a la percepción o facultad que tiene una persona sobre el derecho que le asiste para ejercerlo como tal, aspecto subjetivo; y, el segundo vinculado al esfuerzo estatal de proteger y garantizar la vigencia del contenido de aquellos, aspecto objetivo. En este último, el Estado se circunscribe a crear diferentes medidas que permitan la coexistencia de la comunidad, creando limitaciones al ejercicio absoluto de derechos fundamentales cuando corresponda; un ejemplo de ello es la limitación

del derecho a la libertad individual a los ciudadanos que cometen ilícitos penales, buscando mediante dicha restricción, ya sea, la retribución por el delito cometido, la educación del penado o la intimidación de la sociedad para no cometer mayores ilícitos penales.

El maestro Hernández Rengifo (2013), citando a Bernal Pulido, señala que el Principio de Proporcionalidad se encumbra en época de la Ilustración, puesto que, al considerar al hombre como ser dotado de libertad, la sociedad se ve obligada a circunscribirse a un pacto civil mediante el cual el Estado restrinja su libertad a fin de que esta sea protegida, así como su vida y sus bienes. Y, de allí la exigencia de que las intervenciones estatales fuesen proporcionadas, como es el caso de la libertad individual frente a la comisión de delitos, en el que Beccaria (1764/2015) señaló que el interés común no solo está en que no se cometan delitos, sino que los motivos deberán ser más fuertes para que aparten a los ciudadanos de cometer delitos por ser contrarios al bien jurídico, por lo que debe existir una proporción entre los delitos y las penas; postulado que fue recogido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), conforme a continuación se indica: *“Artículo 8.- La Ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y tan sólo se puede ser castigado en virtud de una Ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente”*.

La historia, nos conmina a señalar que, en la ciudad de Bremen en Alemania, se habría dado la primera llamada de atención para trasladar el Principio de Proporcionalidad del Derecho Administrativo de Policía al Derecho Penal, en tanto que en un Resolución del 22 de agosto de 1875 se solicitaba que las medidas dirigidas contra los periodistas que se negaban a declarar como testigos fueran proporcionales a las penas preestablecidas para los ilícitos penales perseguidos. (Rojas, 2009), ese mismo sentido se instituye en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tras la Segunda Guerra Mundial, por cuanto se dispuso que nadie podría ser sometido a penas crueles, inhumanas o denigrantes.

El maestro Castillo-Córdova (2004) sostiene que la tradición alemana y española han sido acogidos por nuestro país, por cuanto en dichos países se funda el Principio de Proporcionalidad. En Alemania, como se expuso en líneas precedentes, en el Siglo XIX con las sentencias expedidas por el Tribunal Supremo Administrativo, mecanismo que hasta la fecha se viene utilizando e incluso reconociéndose con rango constitucional al proceder del Principio de Estado de Derecho; por su parte, en el ordenamiento jurídico español, se presenta el principio de la interdicción de la arbitrariedad como prohibición de exceso, mandato para actuar razonablemente o proporcionalmente cuando se pretende afectar derechos constitucionales.

En cuanto a la relación del Principio de Proporcionalidad con el Derecho Penal, el maestro Mir Puig (2006) sostiene que el Principio de Proporcionalidad nació como exigencia para las medidas de seguridad; ya que las penas se acogían al Principio de Culpabilidad; sin embargo, esta concepción ha sido dejada de lado, utilizándose el Principio de Proporcionalidad también para graduar las penas, por lo que es un principio general de todo el Derecho Penal; no obstante, es preciso señalar que el Principio de Culpabilidad no puede ser remplazado por el Principio de Proporcionalidad, por cuanto este último es entendido como una prohibición por exceso, relativa al marco de la duración de una sanción previamente determinada, sin ofrecer mayores criterios de limitación de la intervención coercitiva del Estado. (Roxin, 1997)

En nuestro país, el Principio de Proporcionalidad en la norma constitucional se prevé para regímenes de excepción (Artículo 200° de la Constitución Política), empero, el Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia recaída en el Expediente 0010-2000-AI/TC que el Principio de Proporcionalidad responde a un principio del ordenamiento jurídico, por lo que puede ser invocado en cualquier ámbito del derecho. En tal razón, el Principio de Proporcionalidad, en la actualidad, se usa como mecanismo para constitucionalizar o legitimar medidas adoptadas en cuanto a la restricción o limitación de derechos fundamentales.

Siendo así, es menester señalar que, la doctrina reconoce dos tipos de proporcionalidades en relación a la pena. La **proporcionalidad abstracta** tiene lugar con la creación de leyes penales, al que se acoge el Principio de Subsidiariedad en la relación de proporcionalidad penal con la solución de conflictos, herramienta para formular conductas delictivas, estableciendo una pena con un límite mínimo y uno máximo para la restricción de un derecho constitucional. Por su parte, la **proporcionalidad concreta** se presenta en la actividad judicial, al momento de determinarse una pena concreta, conforme a la naturaleza de la acción, los medios empleados, la importancia de los deberes infringidos, la extensión del daño o peligro (Gaceta Jurídica, 2004), sobre este tipo de proporcionalidad se enfoca la investigación que se da cuenta.

Entonces, el Principio de Proporcionalidad implica determinar una relación equilibrada entre la afectación de un derecho constitucional con el fin que se pretende alcanzar, conservación de un bien o interés público (Castillo-Cordova, 2004), por cuanto engloba a un conjunto de criterios o herramientas para medir o sopesar la licitud de dichas medidas restrictivas ante la inutilidad, innecesariedad y desequilibrio del sacrificio que puedan resultar (Barnes, 1998), debiendo cumplir copulativamente con juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, para considerar una medida como proporcional.

### **3.3.1. Idoneidad**

El juicio de idoneidad, exige que la medida tomada tenga un fin y que sea adecuada para dicho fin, por lo que también se le conoce como subprincipio de adecuación (Castillo-Cordova, 2004), el maestro Hernández Rengifo (2013), citando a Robert Alexy, precisa que con este principio se persigue la no adopción de medios inidóneos para el cumplimiento del fin que se pretende alcanzar.

Los alcances de este juicio se enfocan en la base y el motivo sobre el cual la medida restrictiva ha sido adoptada; por lo que, de no cumplirse con ellos, la medida no podría ser analizada con el siguiente requisito-juicio, deviniendo de

plano en no proporcional; caso contrario, sucedería si se cumple con las dos vertientes (fin y adecuación).

En cuanto a la determinación judicial de la pena (proporcionalidad concreta), el juicio de idoneidad se vincula directamente con el Principio de Culpabilidad mediante el cual se atribuyen los hechos con reproche penal al agente; y, con ello, se busca cumplir con las necesidades de prevención o de restabilización del sistema social. (García Caveró, 2019)

### **3.3.2. Necesidad**

El juicio de necesidad, se analiza una vez cumplido con el juicio de idoneidad, implica determinar si la medida adoptada es la menos restrictiva frente a otras igualmente eficaces (Castillo-Córdova, 2004); es decir, la medida restrictiva del derecho fundamental a pesar de ser la más benigna debe cumplir con el fin que se pretende alcanzar.

En la individualización de la pena, el juzgador tendrá la posibilidad de analizar todas las consecuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico establece por la comisión de un ilícito penal, ya que la conformación de diversos tipos penales establece la posibilidad de escoger la pena a imponer; también, cuando el tipo penal establezca solamente la aplicación de una de ellas, el legislador ha previsto diversas alternativas penales, tales como la suspensión de la ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio, la sustitución y conversión de penas.

### **3.3.3. Proporcionalidad en sentido estricto**

Como tercer requisito-juicio, se debe cumplir con el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, en este estadio, conforme señala Castillo-Córdova (2004) citando a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, se analiza el costo-beneficio de la medida restrictiva con el fin que se pretende alcanzar, relación razonable a la que se llega ponderando o equilibrando el beneficio o ventaja de la finalidad que se busca sobre otros bienes o valores en conflicto.

Ahora bien, es oportuno señalar que nuestro ordenamiento jurídico, en el Artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal (1992) establece el Principio de Proporcionalidad, el cual prevé que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho con el objetivo de lograr un equilibrio entre el poder penal estatal, la sociedad y el imputado (Villavicencio Terreros, 2019).

Y, es por ello que, una vez advertido el cumplimiento de los juicios de idoneidad y necesidad para la determinación judicial de la pena, se debe realizar el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, en búsqueda de una pena justa, estadio al cual se puede arribar atendiendo los dispositivos legales que nuestro Código Penal establece como advertiremos a continuación.

#### **IV. DETERMINACIÓN DE LA PENA**

##### **4.1. Etapas en la determinación de la pena**

###### **4.1.1. Determinación legal de la pena**

El Derecho Penal se rige bajo los cánones del Principio de Legalidad, por cuanto debe existir una conducta tipificada como delito para ser considerada como tal y atribuida a una persona; al respecto el maestro Villavicencio Terreros (2019) señala que *“La criminalidad primaria viene a ser el poder de definición a través del cual el legislador erige en delictivas algunas conductas (...)”* (pg. 11).

La determinación de una conducta como ilícito penal trae consigo, la configuración de un tipo penal, en mismo que contiene la consecuencia jurídica, atribuible por su comisión, precisándose un extremo mínimo y uno máximo, a lo que se le conoce como pena abstracta, sirve como marco referencial sobre el cual se ha de fijar una pena concreta (Guevara Vásquez, 2021).

#### **4.1.2. Determinación judicial de la pena**

Una vez definida una conducta con reproche penal, le corresponderá al juzgador atribuir la comisión de tal delito al sujeto que cometió la infracción de la ley penal; en tal sentido, individualizar una pena concreta para ser cumplida, a lo que se le conoce como criminalización secundaria (Villavicencio Terreros, 2019).

##### **4.1.2.1. Teorías en la determinación judicial de la pena**

El Código Penal (1991) en su Libro Primero, Título III, Capítulo II ha establecido las reglas para la individualización de una pena concreta, sin embargo, debemos recalcar que la doctrina desarrolla y reconoce diferentes teorías, como a continuación se presentan:

*Teoría de pena exacta o puntal*, se concibe a la pena como única desconociendo un marco punitivo sobre el cual, el juzgador, deba establecer una pena concreta, en tal sentido, se aleja de la finalidad preventiva de la pena acercándose a una tesis retribucionista (Guevara Vásquez, 2021).

*Teoría del espacio de juego*, a diferencia de la anterior, esta teoría se encuentra acorde con la formación de los tipos penales y reconoce el marco punitivo preestablecido sobre el cual se ha de fijar una pena concreta debidamente fundamentada de acuerdo a la ley penal respectiva; esta teoría surge en la jurisprudencia y se circunscribe a los fines preventivos de la pena. (Cancho Espinal, 2023)

*Teoría del valor posicional o relativo*, conocida también como del valor jerárquico, toma en cuenta la finalidad retributiva en un primer momento, para establecer la duración y magnitud de la pena, para luego, como segundo momento, determinar la pena que se ha de imponer teniendo en cuenta los fines preventivos (Guevara

Vásquez, 2021), al primer nivel se le podría denominar determinación cuantitativa de la pena, mientras que al segundo determinación ejecutiva de la pena, ya que en este momento se evaluará si se podrá dar la exención de la pena o decidir sobre una penal alternativa o su conversión (Cancho Espinal, 2023).

*Teoría de la pena proporcional al hecho*, está relacionada a la gravedad del hecho cometido, atendiendo a la afectación de las víctimas y quedando fuera del lugar las circunstancias relativas al autor. Al respecto, Guevara Vásquez (2021), citando a Andrade Fernandes, sostiene que en el modelo peruano se presenta esta teoría, sin embargo, Cancho (2023) señala que la aplicación de esta teoría es dificultosa en el ordenamiento jurídico, por cuanto los artículos 45-A y 46 y siguientes del Código Penal sustantivo, establecen criterios ajenos a lo preestablecido para cada injusto penal y culpabilidad en la determinación de la pena concreta.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, en atención a las reglas establecidas por el legislador para la determinación de una pena concreta, como la configuración de los tipos penales, considero que en la práctica es de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico la *Teoría de valor posición o relativo*, pero no de forma absoluta, por cuanto la materialización de una pena de justa puede revestir, de acuerdo a las circunstancias, otros caracteres vinculados a las teorías antes esbozadas.

#### **4.1.2.2. Fundamentos de la determinación judicial de la pena**

El Código Penal (1991), señala que para la determinación judicial de la pena se debe tener en cuenta las caracteres económicos, sociales y culturales del agente, así como las circunstancias en las que cometió el ilícito penal; y, la afectación a la víctima y/o sus familiares de acuerdo al caso, ello por cuanto el artículo 45° prevé

los presupuestos en los que se funda y se determina la pena, por parte del juzgador, siendo estos:

*“(…) a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad. b. Su cultura y sus costumbres. c. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad.” (Código Penal, 1991, Artículo 45°).*

#### **4.1.2.3. Individualización de la pena**

Mediante Ley n.º 30076 se incorporó al Código Penal peruano el sistema de tercios (Artículo 45°-A), modificando la operatividad de la determinación judicial de la pena, por cuanto el juez tenía potestad absoluta para imponer penas de acuerdo a su libre razonamiento, teniendo como base las circunstancias de la comisión del ilícito penal sin expresarse en la ley la valoración de aquellas. (Gaceta Penal, 2015).

El maestro Prado Saldarriaga (2016), sostiene que, este nuevo procedimiento operativo permite construir técnicamente la pena que será aplicada al autor o partícipe de un ilícito penal, buscándose, en este estadio, regular las etapas y efectos de la individualización de la pena.

Esta nueva operatividad está seguida de dos fases, la primera vincula a la calificación de la conducta, puesto que se determinará la pena abstracta sobre la cual se va a calcular el quantum correspondiente para la pena a imponer, marco punitivo que deberá

ser dividido en tres partes iguales; por ello la denominación sistema de tercios.

En la segunda fase, se deberán observar las circunstancias en las que se cometió el ilícito penal, así como los caracteres del agente y/o de la víctima, las cuales se precisan en el artículo 46° del Código Penal, en cuanto a las circunstancias de atenuación por parte del agente tenemos la ausencia de antecedentes penales, la realización de la conducta típica por móviles nobles o altruistas o en estado de emisión o temor excusable o por circunstancias personales y/o familiares, por disminuir voluntariamente las consecuencias de la lesión o reparar el daño o peligro provocado o presentarse ante las autoridades respectivas asumiendo responsabilidad de su conducta.

Mientras que, como circunstancias agravantes, encontramos a la realización de la conducta sobre bienes o recursos protegidos para servicio público o de la colectividad, por actuar con un móvil trivial o remunerado, por los medios que se utilizan para la comisión de la conducta, por ocultamiento o abuso de poder, por la condición del agente, por hacer más nocivas las consecuencias de su conducta, por la presencia de pluralidad de agentes o por valerse de un inimputable; todo ello conforme a los numerales 1° y 2°, del artículo precitado en el párrafo precedente; dichas circunstancias son aplicables siempre que no formen parte del tipo penal en el que se subsumió la conducta.

Posterior a la identificación de aquellas circunstancias, para la individualización de la pena, se ha de seguir las siguientes reglas, conforme al artículo 45-A° numeral 2° del Código Penal:

*“a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se*

*determina dentro del tercio inferior. b) Cuando concurren circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio. c) Cuando concurren únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior.”* (Código Penal, 1991, Artículo 45°).

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico prevé reglas para la determinación judicial de la pena cuando se presenten circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, cuando existan solo las primeras, la pena deberá imponerse por debajo del extremo mínimo legal, mientras que cuando existan solo las segundas, la pena deberá imponerse sobre el máximo legal, empero cuando se presenten ambas circunstancias la pena deberá ser impuesta dentro del marco punitivo establecido por la ley.

Dicho ello, es menester destacar que tales reglas son de aplicación en tipos penales en los que no se especifiquen agravantes específicas, por cuanto en aquellos tipos penales se deberá proceder contabilizando las agravantes que establece el tipo penal, para dividir en forma proporcional el marco punitivo por cada una de ellas, conforme lo ha señalado en reiterada jurisprudencia la Corte Suprema de la República, tal como es el caso del Recurso de Nulidad n.º 393-2018/SULLANA.

#### **4.1.2.4. Circunstancias modificatorias de la determinación de la pena**

Un aspecto que no debemos soslayar, en cuanto a la determinación judicial de la pena, es el referido al amplio debate entre la presencia de agravantes cualificadas y atenuantes privilegiadas en nuestro ordenamiento jurídico, sobre las primeras el Código Penal las ha individualizado taxativamente, siendo estas: La condición del agente, la reincidencia, la habitualidad, el uso de menores de edad

y el abuso por parentesco, figuras en las cuales se ha de proceder para determinar judicialmente la pena conforme a las reglas procesales antes expuestas en el punto precedente.

El problema radica en cuanto al tratamiento legal de las atenuantes privilegiadas, por cuanto no se advierte regulación alguna al respecto en nuestro ordenamiento jurídico; empero, como se precisó en líneas precedentes, el Código Penal establece reglas para la determinación de una pena concreta cuando se presenten, allí el fundamento de la polémica.

Al respecto, el maestro Prado Saldarriaga (2016) sostiene que, tanto la tentativa, la complicidad secundaria o la realización imperfecta de una causal de extinción de responsabilidad penal, no son atenuantes privilegiadas sino causales de disminución de la punibilidad, señalando sobre ellas que: “(...) *la(s) atenuantes privilegiadas están destinadas a modificar la reconstrucción del mínimo de la pena conminada, mientras que las causales de disminución de punibilidad operan, por ejemplo, sobre los márgenes de la decisión judicial de aplicar una pena a un hecho punible no consumado (...)*” (pág. 184-185).

Por su parte, el maestro Gancho (2023) siguiendo lo acordado en el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal y Procesal Penal – Moquegua, llevada a cabo el 9 y 10 de junio de 2017, postula la existencia de circunstancias atenuantes privilegiadas considerando a la responsabilidad restringida, artículo 22° del Código Penal; las carencias sociales que haya sufrido el agente y los intereses de la víctima, el interés superior del niño y la unidad familiar, artículo 45° literales A y C, respectivamente del Código Penal.

Ahora bien, bien como señala el maestro Prado Saldarriaga, se debe precisar la diferencia entre circunstancias atenuantes privilegiadas

y causales de disminución de la punibilidad, para lo cual se debe revisar aquellas figuras en las que el ordenamiento jurídico permite la imposición de penas por debajo del mínimo legal, para este trabajo se analizará la Responsabilidad Restringida, para mediante ella, estudiar la determinación judicial de la pena y verificar si se aplican las reglas establecidas para las circunstancias atenuantes privilegiadas.

## **V. RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA**

### **5.1. Marco normativo y conceptual**

El Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo N°635, trajo consigo la institución de Responsabilidad Restringida, artículo 22°, estableciendo como carácter facultativo para los jueces, la reducción de la pena por debajo del mínimo legal establecido para un ilícito penal, siempre que el agente al momento de realizar el hecho se encuentre entre 18 y 21 años de edad o mayor a los 65 años de edad.

El maestro García Caveró (2019) sostiene que tal reducción se apoya en que la madurez de una persona se alcanza progresivamente a lo largo de los años; aunado a ello, el maestro Villavicencio Terreros (2019), citando a Roxin, precisa que a dichas edades, el agente no es aún capaz de comprender el injusto de hecho, por lo que no puede actuar bajo la comprensión de este.

### **5.2. Determinación judicial de la pena**

La determinación judicial de la pena cuando nos encontremos frente a un agente con edad entre 18 y 21 años o mayor de 65 años, implica de conformidad con el artículo 22° del Código Penal, el siguiente proceder:

- a) En primer lugar, por antonomasia, se debería establecer el tipo penal sobre el cual se subsumen los hechos.

- b) Par luego, identificar el marco punitivo que el legislador ha previsto para dicho ilícito penal, por cuanto el extremo mínimo de este, se convertirá en el extremo máximo de la pena a imponer.
- c) Finalmente se determinará la pena conforme al criterio del juez.

Sobre esto último, el problema subyace en el extremo mínimo para imponer la pena correspondiente, así como el mecanismo para determinarla; al respecto, García Caverio (2019), precisa que el extremo mínimo debe ser el de 2 días, de acuerdo con el artículo 29° del Código Penal, Guevara Vásquez (2023), ejemplifica dicho postulado con el delito de robo agravado: El nuevo marco punitivo será el de 2 días y el extremo máximo el de 12 años (extremo mínimo legal del referido ilícito penal); señala que, corresponde aplicar las circunstancias atenuantes y agravantes de los artículos 45-A° y 46° del Código Penal.

Es menester recalcar que, hay ilícitos penales en los que el legislador solo ha establecido el extremo mínimo, por lo que para la determinación de una pena concreta el juzgador toma en cuenta 35 años como extremo máximo, al ser la pena máxima en nuestro país, de conformidad con el artículo 29° del Código Penal; dicha interpretación permite señalar el extremo mínimo de 2 días para la determinación de una pena cuando estemos frente a la institución de la responsabilidad restringida. Sin embargo, es menester precisar que como se ha ahondado en líneas precedentes, nuestro país se alinea a Teorías Preventivas de la Pena, es decir, se busca mediante ella prevenir la comisión de ilícitos penales, generar confianza en la ley penal y reinsertar al penado en sociedad, por lo que establecer un extremo mínimo de 2 días implicaría que una persona sea sancionada con dicha pena, independientemente del delito que cometa siempre y cuando tenga circunstancias atenuantes que permitan ello, como es el caso con el que se ejemplifica, lo cual no cumpliría con las finalidades que busca la imposición de una pena, ni con el principio de proporcionalidad, pues estaríamos frente a un exceso en la disminución penal, llegando así a un mero formalismo en su imposición.

Entonces, por el momento de lo expuesto, se puede colegir que la figura de responsabilidad restringida constituye una causal de disminución de la punibilidad, puesto que no se aplican las reglas procesales de la determinación judicial de la pena por atenuante privilegiada, esto es un tercio del extremo mínimo. Tal como se ha especificado, la determinación de la pena en circunstancias de responsabilidad restringida, responden a la prudencia, criterio y razonamiento del juzgador en particular.

A fin de ahondar en la determinación judicial de la pena de forma práctica, es preciso, previamente, exponer la política criminal que se le ha dado a lo largo de su regulación, así como el tratamiento jurisdiccional formado sobre ella.

### **5.3. Política Criminal**

El Código Penal estableció la institución de Responsabilidad Restringida en el artículo 22°, estando primigeniamente prevista de la siguiente manera: *“Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años, o más de sesenticinco años, al momento de realizar la infracción”*. Empero, a lo largo de los años, el legislador en su afán de disminuir la criminalidad ha realizado distintas modificatorias, como a continuación se detallan:

#### **5.3.1. Ley n.º 27024**

El 10 de agosto de 1998, con Oficio N°092-PR-98, el presidente de la República puso en conocimiento el Proyecto de Ley signado con número 3869/98-CR, al Congreso de la República, referente a la modificación del artículo 22° del Código Penal, proponiendo solo la aplicación de responsabilidad restringida a personas mayores de 65 años de edad, siempre que no hayan cometido los delitos de tráfico de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, espionaje y violación.

De conformidad con la Exposición de Motivos del referido proyecto, dichas limitaciones respondían al clima de violencia e inseguridad ciudadana en

todo el país, que en gran parte era generado por jóvenes delincuentes con edades entre 18 y 21 años, en tanto que al ser sentenciados con la aplicación de responsabilidad restringida, obtenían su libertad raudamente sin ser reeducados, rehabilitados y reincorporados a la sociedad.

En tal sentido, la Comisión de Justicia del Congreso de la República, el 21 de setiembre de 1998, remitió al Pleno, el Dictamen correspondiente al referido proyecto de ley, concluyendo que la facultad de atenuación de la pena en agentes con edad entre 18 y 21 años tiene sustento en su inmadurez, al no completar su desenvolvimiento mental y moral, lo que les permite fácilmente ser influenciados para cometer ilícitos penales; por lo que, se debe continuar regulando la responsabilidad restringida para dichas personas, tanto más si es deber del Estado el tratar de reeducar y rehabilitar al sentenciado; en cuanto a la restricción de delitos, la Comisión opinó favorablemente.

El 11 de diciembre de 1998, se llevó a cabo la 21ª Sesión del Pleno del Congreso de la República, en la que luego de un largo debate, se aprobó el texto sustitutorio propuesto por la Comisión de Justicia con el voto de 65 congresistas a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.

El 25 de diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley Modificatoria del Artículo 22º del Código Penal, Ley N°27024.

### **5.3.2. Ley n.º 29439**

El 02 de abril de 2009, con Oficio N°093-2009-PR, el señor Presidente de la República, sometió a consideración del Congreso de la República el Proyecto de Ley signado con número 3132/2008, el cual proponía entre otros la modificación el artículo 22º del Código Penal, ampliando la restricción de aplicación para delitos cuya pena privativa de libertad sea no menor de 25 años o cadena perpetua, así como los delitos de conducción en estado de ebriedad, drogadicción o bajo los efectos de sustancias

psicoactivas, homicidio culposo y lesiones culposas por accidente de tránsito; por cuanto resultaba alarmante el alto índice de comisión de dichos ilícitos penales por jóvenes entre 18 y 21 años de edad.

El Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en cuanto a dicha modificatoria, concluyó señalando que resultaba atendible la restricción de aplicación de la responsabilidad restringida en dichos ilícitos penales, al no violentar la proporcionalidad de las penas por cuanto no incide directamente en la determinación de la pena sino en la aplicación de un beneficio.

El 29 de octubre de 2009, en la 12ª Sesión del Pleno del Congreso, llevó a cabo el debate del referido proyecto de ley, el cual exonerándose de segunda votación fue aprobado, el mismo que fue publicado el 19 de noviembre de 2009 signado con Ley N°29439.

### **5.3.3. Ley n.º 30079**

El 19 de abril de 2012, la congresista Luisa María Cuculiza Torre presentó el Proyecto de Ley n.º1024/2011-CR proponiendo, entre otros, la modificación del artículo 22º del Código Penal, proponiendo la aplicación de la responsabilidad restringida solamente a agentes que tengan entre 15 a 18 años de edad, por cuanto es un segmento de la población al que se está vinculando la mayor incidencia criminal, sin que puedan ser juzgados por los hechos que comenten a pesar de ser capaces de comprender el ilícito penal y su proceder, debiendo eliminarse su incapacidad relativa.

Asimismo, el 29 de abril de 2013, el congresista José León Rivera conjuntamente con los congresistas integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana de Congreso, presentaron el Proyecto de Ley n.º2153/2012-CR, proponiendo la derogación del artículo 22º del Código Penal, por cuanto conforme a las estadísticas la criminalidad en nuestro país, esta se da en una edad temprana del agente, por lo que

considerando la actual evolución psicobiosocial el cerebro del ser humano estaría completamente maduro superado los 30 o 40 años de edad, entonces se debería extender la aplicación de la responsabilidad restringida hasta dicho extremo, lo cual no resultaría procedente, en tal sentido se puede asumir responsabilidad desde los 18 años, aún más si dicho trato diferenciado en cuanto a agentes de 18 a 21 años y mayores de 65 años, quebranta el principio-derecho de igualdad, frente a agentes que cuenten con más de 21 años y menos de 65 años de edad.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el día 06 de junio de 2013 remitió el Dictamen sobre los proyectos de ley precitados y otros, sosteniendo en esencia la inviabilidad de derogar el artículo 22° del Código Penal, sin embargo, la comisión propuso la ampliación de la restricción para la aplicación del artículo en mención, para los delitos de homicidio calificado, extorsión, secuestro y robo agravado.

El miércoles 16 de julio de 2013, se llevó a cabo la 6ªG Sesión del Pleno del Congreso de la República, en el que se dio cuenta de la propuesta del congresista Octavio Salazar, para incorporar al artículo 22° la restricción de su aplicación para agentes que pertenezcan a una de organización criminal y para agentes que cometan los delitos de homicidio calificado por condición del agente y feminicidio; así también, se tomó en cuenta la propuesta de la congresista Martha Chávez, incorporando a tal restricción, el delito de apología. En ese sentido, el proyecto fue aprobado y elevado al Poder Ejecutivo para la autógrafa correspondiente, por tal razón el día 19 de agosto de 1998 se publicó la Ley n.º30079.

#### **5.3.4. Decreto Legislativo n.º1181**

El 08 de junio de 2015, con Oficio N°083-2015-PR el presidente de la República, presentó al Congreso de la República, el Proyecto de Ley signado con número 4569/2014-PE, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha

contra la delincuencia y el crimen organizado, facultades que se le fueron otorgadas con Ley n.º30036

En tal sentido, el 27 de julio de 2015 se emitió el Decreto Legislativo n.º1181, estableciendo en la Única Disposición Complementaria Modificatoria, la modificación del artículo 22º del Código Penal, restringiendo su aplicación de responsabilidad restringida para el delito de sicariato, conspiración y ofrecimiento para tal delito, así como para los ilícitos penales de genocidio, desaparición forzada y tortura.

Como se hapreciado, en las líneas precedentes, a lo largo de la historia legislativa del artículo 22º del Código Penal, ha sufrido restricciones en su aplicación e incluso se ha pretendido su derogación, sin que se haya concretado.

#### **5.4. Tratamiento jurisdiccional**

En el plano de aplicación, tenemos que, el 18 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la República llevó a cabo el IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial (Acuerdo Plenario n.º4-2008/CJ-116), en el que se estableció doctrina legal sobre la aplicación del artículo 22º del Código Penal, responsabilidad restringida, para los delitos de violación de la libertad sexual, señalando que los magistrados se encuentran habilitados para no aplicar dicha restricción si consideran que dicha norma es discriminatoria e impide un resultado jurídico legítimo.

Así también, el 12 de junio de 2017, se llevó a cabo el X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria (Acuerdo Plenario N°04-2016/CIJ-116), estableciendo doctrina legal en cuanto la inaplicación de la restricción del segundo párrafo del artículo 22º del Código Penal, fundamentando en esencia que la disminución de la pena por responsabilidad restringida, tiene incidencia en la evolución o madurez del agente y no en las características o gravedad del

injusto penal, por lo cual la restricción a su aplicación resultan ser inconstitucionales al quebrantar el principio–derecho de igualdad.

Es menester traer a colación lo antes expuesto, por cuanto en la práctica las limitaciones a los delitos restringidos para la aplicación de la responsabilidad restringida no se dan, como en el caso del delito de robo agravado, bajo los alcances de los objetos de esta investigación, corresponde ahora analizar el referido delito y su política criminal.

## **VI. DELITO DE ROBO AGRAVADO**

### **6.1. Naturaleza del delito de robo**

En la doctrina, se tienen marcadas posturas en cuanto a la naturaleza del delito robo y su vinculación con el delito de hurto, tal es el caso que Rojas Vargas (2020) sostiene que la diferencia tanto teórica como normativa entre esos ilícitos, surgió en el Derecho Romano, para perfeccionarse con Leyes feudales españolas, dado que se planteó el ilícito de robo con lesiones físicas y resultado de muerte; aspectos sobre los cuales, en 1801, Feuerbach sostuvo la teoría del delito de hurto peligroso y el robo propiamente dicho, postura que fue recogida en la legislación del Reino de Baviera en el Código Penal de 1813. Sin embargo, en 1810 el Código Penal francés, estableció una concepción totalmente distinta; en tanto que, el delito de hurto se convirtió en una modalidad técnico-legislativa de robo, postura que se generalizó en Europa y América Latina, a excepción del Código Penal español de 1822, que mantuvo la separación taxativa de estos ilícitos penales. Fue hasta 1889 cuando el Código Penal italiano, retomó la postura primigenia (romana) de la concepción y relación de estos ilícitos penales, tendencia que recoge el Código Penal peruano de 1991.

Por tal razón, para el maestro peruano Reátegui Sánchez (2019) siguiendo a Vilcapoma Bujaico, el delito de robo es un delito autónomo, por cuanto lo que se procura resguardar es la vida y la integridad de la persona por sobre el interés patrimonial, circunstancia que no sucede en el delito de hurto. Mientras que, para

el maestro argentino Creus (1998) el delito de robo “(...) es un hurto agravado por la violencia que se ejerce como fuerza en las cosas o como violencia sobre las personas, o sea por los medios perpetrados para lograr el apoderamiento o consolidarlo” (p. 417), como se advierte la concepción del delito de robo respecto al delito de hurto, es un aspecto que todavía cuenta con diferentes posturas.

Al respecto, Salinas Siccha (2019) identifica tres teorías: 1) Se concibe al delito de robo como una variedad del delito de hurto agravado, teniendo como base la influencia del Código Penal colombiano; 2) siguiendo la línea doctrinaria de Bramont-Arias Torres y García Cantizano, se concibe como un delito sumamente complejo porque afecta diferentes bienes jurídicos, incluso la vida; y, 3) tomando en cuenta los postulados de Peña Cabrera, señala que el delito de robo agravado tiene naturaleza autónoma por su estructura típica que lo diferencian del hurto agravado.

Teniendo en cuenta lo expuesto, es de acogerse a esta última teoría, en tanto que el legislador ha dotado en la estructura típica notorias diferencias del delito de robo con el delito de hurto, convirtiéndolo en un tipo penal completamente autónomo, como se advertirá en los acápites precedentes.

## **6.2. Delito de robo**

La configuración de un tipo penal agravado necesariamente deriva de la constitución del tipo base; es decir para la configuración del ilícito penal de robo agravado previamente debe contarse con los elementos constitutivos del delito de robo. Ello, en razón de que el tipo penal agravado solo contiene circunstancias bajo las cuales la conducta básica del tipo penal se agrava, entendiendo esta agravación en el marco punitivo establecido por el legislador; sobre el cual se deberá fijar una pena concreta.

### 6.2.1. Determinación Conceptual

El término «robo» es el indicativo presente del infinitivo robar, proveniente del latín vulgar «raubare» y del germánico «raubôn» que hace referencia a la acción de quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, s.f.), acción que para el derecho se ha configurado como un ilícito penal en diversas legislaciones.

Al respecto, en el antiguo Derecho Romano se previa «la rapiña» como un ilícito penal, precisándose el ejercicio de violencia para su comisión y sus modalidades relativas a la autoría y coautoría; así como, al empleo de instrumentos; tal como se advierte del Título VIII del Libro XLVII del Digesto (GOMEZ MARIN & GIL Y GOMEZ, 1873).

Tal es así que, en la actualidad, la legislación italiana y uruguaya contemplan esta acción denominándola «delito de rapiña», por su parte la legislación paraguaya la denomina «delito de latrocinio»; en nuestro país se le denomina «delito de robo» y popularmente «asalto» (ROJAS VARGAS, 2020).

### 6.2.2. Tipo penal

El ilícito penal de robo es un delito que contra «El Patrimonio», establecido en el Libro Primero, Título V, Capítulo II del Código Penal; siendo su configuración típica, de conformidad con el artículo 1° de la Ley n.º27472 publicada el 05 de junio de 2001, la siguiente:

*“El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no*

*menor de tres ni mayor de ocho años*” (Código Penal, 1991, Artículo 188).

### **6.2.3. Conducta típica**

El legislador ha señalado que el ilícito penal se configura cuando exista “violencia” o “amenaza” con un peligro inminente a la víctima para el apoderamiento de sus bienes, para Prado Saldarriaga (2017) la violencia es toda agresión realizada con la finalidad de vencer o neutralizar la acción que puede oponer una víctima a la sustracción o apoderamiento de sus bienes, mientras que las amenazas son la advertencia de un mal futuro, inminente y grave, con idóneo potencial de materializarse impidiendo la reacción de la víctima para enfrentar la sustracción de sus bienes.

Por su parte, Reátegui Sánchez (2019) señala que la violencia y la amenaza son medios tradicionales para la configuración del delito de robo, no siendo instrumentales, por lo que la violencia implica una acción efectiva y real sobre la víctima con la finalidad de la sustracción de sus bienes; y, en cuanto a la amenaza señala que esta debe ser manifiesta que produzca efectos intimidatorios en la víctima sin que permita ejercer resistencia o defensa de sus bienes.

La doctrina argentina sostiene que la violencia ejercida en el delito de robo es conocida como *vis absoluta* porque la resistencia de la víctima o un tercero es vencida debido a la energía física empleada por el sujeto activo, mientras que denomina *vis compulsiva* o relativa a la amenaza o intimidación, puesto que detiene la voluntad de la víctima ante la amenaza de un mal físico inminente (LA LEY, 2004), pudiendo ser la resistencia objeto de superación real, presunta o imaginaria (CREUS, 1998).

En ese sentido, podemos advertir que la doctrina es uniforme, de conformidad con el tipo penal, en precisar a la violencia y amenaza como elementos constitutivos del ilícito penal de robo, estando el primero referido al daño producido ya sobre la víctima y el segundo como el potencial riesgo de que este suceda.

#### **6.2.4. Bien jurídico protegido**

Para el maestro español Muñoz Conde (2015), tanto en el delito de hurto como el delito de robo el bien jurídico protegido es la posesión del bien, para el delito de robo el apoderarse de la cosa ajena se da mediante fuerza en las cosas, violencia o intimidación en las personas, en esa misma línea el maestro peruano Salinas Siccha (2019) sostiene que: “El bien jurídico protegido de modo directo es el patrimonio representado por el derecho real de posesión primero y después por la propiedad” (p. 1337).

Al respecto, Peña Cabrera Freyre (2014) tomando las posturas de Pérez Manzano, Bustos Ramírez y Rojas Vargas, señala que si bien es cierto que, el delito de robo constituye un atentado contra el patrimonio, es cierto también que su forma comisiva afecta la libertad, la vida, el cuerpo y la salud; por lo que, estos derechos también son objeto de tutela; por su parte Reátegui Sánchez (2019) sostiene que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se advierte que el delito de robo agravado involucra la protección de dos bienes jurídicos, el patrimonio y la integridad física, por lo que se considera a este delito como un delito pluriofensivo.

En ese sentido, como ya se ha señalado precedentemente, conforme a la estructura típica del delito de robo en nuestro país, sería de recibo esta última postura, en tanto que la protección de mayores bienes jurídicos, tales como la vida, el cuerpo y la salud además del patrimonio, dotan de autonomía al delito de robo, y estos se ven reflejados en el tipo penal agravado.

### **6.2.5. Sujetos**

Conforme a la construcción típica del ilícito penal de robo, el sujeto activo podrá ser cualquier persona natural, mas no persona jurídica por cuando esta no podría desplegar la acción de violencia o amenaza contra la víctima (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2019), así también, se excluye para el copropietario o coheredero que esté en posesión del bien. (SALINAS SICCHA, 2019).

Ahora bien, el sujeto pasivo (la víctima) será el propietario y/o poseedor de un bien mueble; empero, si un tercero es la persona que resiste a la acción de sustracción del bien, también se le considerará sujeto pasivo conjuntamente con el propietario y/o poseedor (SALINAS SICCHA, 2019); considerándose al primero sujeto activo del ilícito penal y al segundo sujeto pasivo de la acción (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2019); en ese sentido, las personas jurídicas también serían susceptibles de ser sujetos pasivos de la acción en este ilícito penal.

### **6.3. Configuración del delito de robo agravado**

Ahora bien, la configuración de un tipo agravado necesariamente deriva de la constitución del tipo base; es decir para la configuración del ilícito penal de robo agravado previamente debe contarse con los elementos constitutivos del delito de robo. Ello, en razón de que el tipo penal agravado solo contiene circunstancias bajo las cuales la conducta básica del tipo penal se agrava, entendiendo esta agravación en el marco punitivo establecido por el legislador; sobre el cual se deberá fijar una pena concreta.

En ese sentido, previamente a precisar tales circunstancias establecidas en el artículo 189° del Código Penal, es menester traer a colación la historia legislativa en cuanto al marco punitivo del artículo en mención, bajo la dación del código sustantivo penal vigente.

### **6.3.1. Política criminal en el delito de robo agravado.**

#### **6.3.1.1. Decreto Legislativo n.º 635**

El 08 de abril de 1991 se publicó el Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo n.º 635, conteniendo en su Libro Segundo al Título V, referido a los delitos contra el Patrimonio; comprendiendo a la vez, al Título II que prevé los ilícitos penales de robo simple, artículo 188º, y robo agravado, artículo 189º; la estructura típica de este último se circunscribe a circunstancias que agravan el tipo base, con un marco punitivo distinto; es decir, para el delito robo simple, la consecuencia jurídica aplicable se encontraba entre los 02 y 06 años de pena privativa de la libertad, mientras que para el delito de robo agravado el marco punitivo estaba comprendido entre 03 y 08 años.

#### **6.3.1.2. Ley n.º 26319**

El 02 de noviembre de 1993, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley n.º 01066 para modificar los artículos 186º, 188º y 189º del Código Penal, en tal sentido, el Congreso de la República, el miércoles 18 de mayo de 1994, tras el dictamen de la Comisión de Justicia, llevó a cabo su debate y votación, del Diario de Debates de la Sesión del Pleno se puede apreciar que el Ejecutivo presentó tal proyecto de ley, con la finalidad de establecer agravantes y atenuantes, así como, sancionar con mayores penas los ilícitos penales de hurto, robo y robo agravado por haberse aumentando en gran proporción su comisión, teniendo penas sumamente bajas que permitía al delincuente ingresar a un establecimiento penitenciario y salir en breve tiempo para continuar con sus actividades criminales.

Bajo el criterio de la funcionalidad de la pena, la modificatoria fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República, estableciendo para el delito de robo agravado, tres grados de agravantes, al primero con un marco punitivo no menor de cinco ni mayor de quince años, mientras que al segundo, uno no menor de diez ni mayor de veinte años, y al tercero un marco punitivo de quince a veinticinco años cuando; respecto a este último, el Ejecutivo pretendía que la pena sea la de cadena perpetua; sin embargo, la Comisión de Justicia teniendo en cuenta la rehabilitación y resocialización del penado, así como la graduación de la pena con la del delito de terrorismo (gravedad del hecho), consideró que veinticinco años de pena privativa de libertad cumplía con tal fin; Ley que fue signada con número 26319 y publicada el 01 de enero de 1994.

#### **6.3.1.3. Ley n.º 26630**

El 11 de junio de 1996, con Oficio n.º 077-PR-96 el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley n.º 1419/95-CR con la finalidad de modificar los artículos 152º y 189º del Código Penal, en la breve exposición de motivos se indica que el delito de robo agravado tuvo una pena benigna lo que permitió el incremento de la actividad delictiva al tener la rápida liberación de los sentenciados al acogerse a beneficios penitenciarios. El 15 de junio de 1996, con sesenta y tres votos a favor y dieciocho en contra el Pleno del Congreso de la República aprobó aumentar el marco punitivo del delito de robo agravado, en el primer grado de agravantes con una pena no menor de diez ni mayor de veinte años, en el segundo grado de agravantes, una pena no menor de veinte ni mayor de veinticinco años y fijando cadena perpetua para el tercer grado de agravantes, Ley que lleva por número 26630 y fue publicada el 21 de junio de 1996.

#### **6.3.1.4. Decreto Legislativo n.º896**

El 24 de mayo de 1998, el Poder Ejecutivo con Decreto Legislativo n.º896 modificó, entre otros, el marco punitivo del delito de robo agravado, gracias a las facultades otorgadas por el Congreso de la República con Ley n.º 26950, unificando los dos primeros grados de agravantes, estableció un marco punitivo entre quince y veinticinco años, y manteniendo la pena de cadena perpetua para el tercer grado de agravantes.

#### **6.3.1.5. Ley n.º27472**

El 07 de diciembre de 2000, el congresista Fernán Altuve-Febres Lores presentó el Proyecto de Ley n.º979/2000-CR proponiendo la derogación del Decreto Legislativo n.º896, precisó en su exposición de motivos que la tendencia del Derecho Penal va en despenalizar algunas conductas para llegar un mínimo indispensable de ellas que requieran del internamiento, debiendo existir correlación entre las penas con la gravedad; por lo que, el Decreto Legislativo n.º 896 no sigue este propósito al aumentar la penas a niveles máximos de los que establecía el texto original.

El dictamen de la Comisión de Reformas de Códigos consideró acertada la iniciativa legislativa con el propósito de racionalizar el marco punitivo, atendiendo a criterios de proporcionalidad.

Con cincuenta y ocho votos a favor y cero en contra, el Pleno del Congreso aprobó, entre otros, derogar el Decreto Legislativo n.º896; por tanto, para el delito de robo agravado se retornó a lo establecido por Ley n.º26630, adicionando una agravante más al tercer grado de agravantes; tal dispositivo legal fue publicado el 05 de junio de 2001 signada con Ley n.º27472.

#### **6.3.1.6. Ley n.º 29407**

El 28 de agosto de 2006, el congresista Raúl Castro Stagnaro presentó el Proyecto de Ley n.º 174/2006-CR con la finalidad de modificar los artículos que contienen el delito de robo agravado y receptación, en razón de la creciente violencia en las calles y con el propósito de salvaguardar la seguridad ciudadana; por lo que, junto a otras iniciativas legislativas, el Pleno del Congreso aprobó dicha modificatoria, quedando el delito de robo agravado, en cuanto a su penalidad, para el primer grado de agravantes un marco punitivo no menor de quince ni mayor de veinte años, para el segundo grado de agravantes una pena no menor de veinte ni mayor de treinta años; y, manteniendo la cadena perpetua para el tercer grupo de agravantes, Ley publicada el 18 de setiembre de 2009 signada con número 29407.

#### **6.3.1.7. Ley n.º 30076**

Con fecha 19 de agosto de 2013 se publicó la Ley n.º 30076 con la que se modifica el artículo 189º del Código Penal, sin embargo, el extremo modificatorio solo se ajustó a parámetros de circunstancias que configuran la forma agravada del delito de robo, sin que se modifique el marco punitivo establecido en ley precedente.

#### **6.3.1.8. Decreto Legislativo n.º 1578**

Con fecha 18 de octubre de 2023, se publicó el Decreto Legislativo n.º 1578, emitido por el Poder Ejecutivo en razón de la Ley n.º 31880, decreto que modifica el artículo 189º del Código Penal con el que se tipifican mayores circunstancias que agravan el tipo, sin que haya variación en el marco punitivo ya establecido.

Bien, como se ha detallado en los párrafos precedentes el legislador, a lo largo de los años, bajo el móvil de combatir el masivo índice delictivo producido por la comisión del delito de robo agravado, ha considerado aumentar su marco punitivo; sin embargo, los efectos de tal decisión no han seguido el fin propuesto, ya que como se ha advertido, podemos deducir que, una vez hecha la modificatoria al tipo penal (aumentar la pena), el índice criminal no se redujo, por el contrario el legislador optó por ser más drástico en su pena, para proseguir con el fin primigenio.

Al respecto, el Tribunal Constitucional (2021) señaló que el extremo mínimo del ilícito penal de robo agravado, a la fecha es cuatro veces a lo establecido en el texto original, siendo que, si se compara con el marco punitivo establecido para delitos que afectan bienes jurídicos como la vida o la libertad, resultan no ser proporcional.

### **6.3.2. Circunstancias configurativas del delito de robo agravado**

Para el maestro Prado Saldarriaga (2017) las circunstancias configurativas del delito de robo agravado responden a los siguientes indicadores: “i) lugar de comisión, ii) modo de ejecución, iii) ocasión de comisión del delito, iv) pluralidad de agentes, v) utilización de medios específicos, vi) características del sujeto activo, vii) características personales de la víctima y viii) producción de resultados graves.” (pg. 91).

Con ello, como se ha señalado en líneas precedentes, el delito de robo agravado sería pluriofensivo, por cuando lo que se pretende proteger no es tan solo la propiedad, sino incluso hasta la vida.

Siendo así, el tipo penal vigente, conforme al Artículo 189° del Código Penal, modificado por Decreto Legislativo n.º 1578 prevé tres grados de

agravantes en relación directa al marco punitivo previsto para cada uno de ellas, conforme a continuación se advierte:

#### **6.3.2.1. Primer grado de agravantes**

Para el primer grado de agravantes, la pena podrá ir desde los doce hasta los veinte años, en las siguientes circunstancias:

*“a) Inmueble habitado. b) Durante de noche o en el lugar desolado. c) A mano armada. d) En medios de transporte. e) Fingiendo ser autoridad o servidor público o privado. f) En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. g) Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. h) Sobre equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistema de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar.”* (Código Penal, 1991, Artículo 189°)

#### **6.3.2.1. Segundo grado de agravantes**

En cuanto al segundo grado de agravantes, la pena podrá ir desde los veinte hasta los treinta años, en las siguientes circunstancias:

*“a) Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima, b) Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. c) Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. d) Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación. e) Si se utiliza material o artefacto explosivo para la sustracción de equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistema de*

*telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar. f) Si se utiliza vehículos motorizados para la sustracción de equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistema de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar.” (Código Penal, 1991, Artículo 189°)*

#### **6.3.2.1. Tercer grado de agravantes**

Ahora bien, en cuanto al tercer grado de agravantes, se ha previsto la aplicación de la pena de cadena perpetua (35 años de pena privativa de la libertad), siempre que el agente cometa el ilícito en calidad de integrantes de una organización criminal o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

### **VII. DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO CON RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA.**

Después de haber analizado cada una de las figuras objeto de estudio, corresponde analizar su relación entre ellas; es decir, el Principio de Proporcionalidad en la determinación judicial de la pena en cuanto al delito de robo agravado cuando el agente cuenta con responsabilidad restringida, una edad entre 18 y 21 años o más de 65 años.

Al respecto, para la determinación judicial de la pena en el delito de robo agravado, no sería de aplicación el sistema de tercios sino el sistema escalonado o proporcional, empero, no se debe soslayar que nos encontramos frente a la figura de responsabilidad restringida, por lo que tampoco será de aplicación el referido sistema, sino las reglas que establecidas para aquella. En tal sentido, si el marco punitivo del delito de robo agravado es de 12 a 20 años de pena privativa de la libertad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 189° del Código Penal, serán 12 años el extremo máximo a imponer, si se aplica la figura de responsabilidad restringida.

Ahora bien, en el juicio de idoneidad, se deberá tener en cuenta el Principio de Culpabilidad y la funcionalidad preventiva que se alcanzará con la pena a imponer, constituyendo el fin y la adecuación del fin, aspectos sobre los cuales corresponderá al proceso y circunstancias de cada caso en concreto. En el juicio de necesidad, se analizará si existen alternativas penales igualmente eficaces para los fines que persigue la imposición de una pena privativa de la libertad.

Posteriormente, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se deben analizar las circunstancias del caso que permitan alcanzar una pena justa, lo cual para fines del presente estudio se debe condecir con el razonamiento de los operadores de justicia, como se abordará en el siguiente capítulo.

## CAPITULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS

### I. Unidad de análisis de la investigación

En función al objeto de la investigación se procura establecer si al momento de determinar judicialmente la pena, por debajo del extremo mínimo legal, en el delito de robo agravado, se tienen en cuenta criterios que garanticen la observancia del Principio de Proporcionalidad, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad; siendo así la población y la muestra se ha considerado bajo los siguientes parámetros:

#### 1.1. Población

Se cuenta como población a las ejecutorias supremas en materia penal expedidas por la Corte Suprema de Justicia de la República, en el año 2022, respecto al delito de robo agravado.

#### 1.2. Muestra

La muestra de la investigación, se circunscribe al análisis de cincuentas (50) ejecutorias supremas referentes a la determinar judicialmente la pena cuando el agente posea una edad entre 18 y 21 años.

### II. Evaluación de ejecutorias supremas sobre determinación judicial de la pena en el delito de robo agravado cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad

**Tabla N°01:**

*Resultado de la revisión de las ejecutorias supremas de la Corte Suprema de Justicia de la República sobre determinación judicial de la pena en el delito de robo agravado cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad.*

Ejecutoria suprema	Decisión	Fundamento de la decisión	Comentario
Recurso de Nulidad n.º137-	“(…) <b>HABER NULIDAD</b> en el	Si bien por la ausencia de	El Supremo Tribunal si bien

2022/Lima Norte	<i>extremo que le impuso ocho años de pena privativa de libertad; y, <b>REFORMÁNDOLA</b>, le impusieron seis años con seis meses de privación de libertad (...)</i> ” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º137-2022/Lima Norte, 2022, p. 7.).	antecedentes penales, el <i>a quo</i> disminuyó 4 años de pena privativa de la libertad, en atención al Principio de Proporcionalidad, debió disminuirse la pena a seis años y seis meses la privación de la libertad, por cuanto el agente cuenta con responsabilidad restringida.	reduce la pena privativa de libertad por responsabilidad restringida atendiendo al Principio de Proporcionalidad, no señala criterios para su determinación, limitándose a establecer una pena de seis años y seis meses, reducción que responde a un tercio de la pena impuesta por el <i>a quo</i> .
Recurso de Nulidad n.º 552-2020/ Callao	<i>“(…) <b>II. Declarar HABER NULIDAD en la referida sentencia, en el extremo que le impuso a AUGUSTO JUNIOR TEJADA VILLEGAS diez años de pena privativa de libertad; y <b>REFORMÁNDOLA</b>, le impusieron OCHO</b></i>	Conforme a la regla interpretativa de la Casación n.º237-2019/Puno, referente a cuanto más próxima esté el agente a los 18 años de edad, corresponderá mayor reducción de la pena; en este caso	La Corte Suprema, aplica indirectamente el principio de proporcionalidad, estableciendo como criterio determinante la cercanía de la edad del agente a los 18 años para aplicar

	<i>AÑOS de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º552-2020/Callo, 2022, p. 58)</i>	al contar el agente, 19 años 6 meses y 15 días de edad se debe reducir la pena privativa de la libertad en cuatro años.	una mayor reducción, en este caso se redujo cuatro años de privación de la libertad por estar a 1 año 6 meses y 15 días de los 18 años de edad.
Recurso de Nulidad n.º1028-2021/Lima	<p><i>“<b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que impuso a <b>ANTONY MANUEL BRACAMONTE BAZAN</b>, ocho años de pena privativa de la libertad efectiva, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Elizabeth Baldeon Nongrados.</i></p> <p><i><b>REFORMÁNDOLA</b>, le impusieron siete años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la</i></p>	Se debe imponer una pena por debajo del mínimo legal por cuanto el agente cuenta con responsabilidad restringida, puesto que tenía 18 años y 2 meses de edad al momento de la comisión del delito, por lo que la pena privativa de la libertad a imponer es de 8 años, en función a la discrecionalidad y al principio de proporcionalidad; además, se reduce	Como se advierte en la ejecutoria suprema bajo análisis, el Supremo Tribunal si bien hace referencia al principio de proporcionalidad, no señala los criterios en los que se basa para rebajar cuatro años de pena privativa de libertad por responsabilidad restringida, cabe indicar que dicha disminución corresponde a un tercio del extremo

	<i>República, Recurso de Nulidad n.º1028-2021/Lima, 2022)</i>	un año por haberse acogido a la conclusión anticipada.	mínimo del tipo base.
Recurso de Nulidad n.º 1116-2021/  Lima Sur	<p><i>“I. Declarar <b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que impuso a <b>WILDER EDGAR PÉREZ QUISPE</b> seis años, diez meses y nueve días de pena privativa de libertad, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de Magaly Maritza Casma Lozano y Miguel Ángel Casma Lozano.</i></p> <p><i><b>REFORMÁNDOLA,</b> le impusieron la pena de seis años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de</i></p>	Por responsabilidad restringida se reduce prudencialmente en cinco años, teniendo en cuenta las condiciones personales del agente, así como su grado de instrucción y sus condiciones de vida. Además, se redujo un año de privación de la libertad, por haberse acogido el agente a la conformidad procesal; por tanto, corresponde imponer una pena de seis años de privación de la libertad.	En este caso, el Supremo Tribunal ha tomado en cuenta el artículo 46º del Código Penal, fundamento de la individualización de la pena, como criterios para reducir la pena en cinco años por responsabilidad restringida, lo que permitiría inferir la aplicación de proporcionalidad entre el hecho cometido, las consecuencias de aquel y la finalidad que se pretende alcanzar.

	<i>Nulidad n.º1116-2021/Lima Sur, 2022)</i>		
Recurso de Nulidad n.º1127-2021/Lima	<p><b><i>“I. Declarar HABER NULIDAD en el extremo de la pena impuesta a VÍCTOR FRANCISCO PAJA RUIDIAS en la Sentencia (...) que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, a doce años de privación de libertad; y, REFORMÁNDOLA, la disminuyeron a siete años de pena privativa de libertad, (...)”</i></b></p> <p><i>(Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1127-2021/Lima, 2022)</i></p>	<p>Al momento de los hechos el agente contaba con 19 años de edad, por lo que corresponde la reducción de la pena abstracta, en atención del principio de proporcionalidad, se estima dicha reducción en cuatro años, reduciéndose además un séptimo de la pena por conclusión anticipada, por lo que implica la imposición de una pena de 7 años.</p>	<p>En este caso si bien se cita al Principio de Proporcionalidad, no determinan razones que impliquen la disminución de 4 años de privación de la libertad, lo cual corresponde un tercio del extremo mínimo de la pena abstracta.</p>

<p>Recurso de Nulidad n.º298-2020/Lima</p>	<p>“Por unanimidad, <b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo de (la pena impuesta) a (...) <b>ADRIÁN ADOLFO SÁNCHEZ PINEDO</b> (7 años de pena privativa de libertad). <b>REFORMÁNDOLAS:</b> (...) <b>2.</b> Por unanimidad, <b>IMPUSIERON</b> a <b>ADRIÁN ADOLFO SÁNCHEZ PINEDO</b> 12 años de pena privativa de libertad, (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º298-2020/Lima, 2022)</p>	<p>Al haberse cometido el delito en contra de pluralidad de víctimas la pena privativa de la libertad a imponer será por una duración de 15 años, por cuanto conforme a las circunstancias del hecho la pena abstracta es de 20 años. A ello, se disminuyen 3 años por haberse acogido a la bonificación procesal de conclusión anticipada.</p>	<p>El Supremo Tribunal toma en cuenta el número de afectación para aplicar la pena concreta por debajo del mínimo legal, lo que hace apreciar la aplicación del criterio delimitador de la Corte, en este caso, para imponer una pena cuando se está frente a la responsabilidad restringida por la edad del agente.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º1173-2021/Lima</p>	<p>“<b>I. Declarar HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que le impuso a <b>JUAN JOSÉ ROMERO MILLER</b> ocho años de pena</p>	<p>La reducción adecuada por responsabilidad restringida debió ser de cinco años, por tanto la privación de la libertad debió ser</p>	<p>En este caso la Corte Suprema de Justicia de la República, no hace mayo hincapié en los criterios para determinar la pena</p>

	<p><i>privativa de libertad por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravante, en perjuicio de Freddy Maicol Delgado Davan.</i></p> <p><b>REFORMÁNDOLA,</b></p> <p><i>le impusieron seis años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1173-2021/Lima, 2022)</i></p>	<p>la de siete años, reduciendo un año más, por conclusión anticipada.</p>	<p>por debajo del mínimo legal.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º64-2021/ Lima Sur</p>	<p><b>“II. Declarar <i>HABER NULIDAD</i> en la (...) sentencia, en el extremo que impuso, por mayoría, diez años de pena privativa de libertad a <i>ZEUS CHAVARRI BARBARAN</i>; y, <b>REFORMÁNDOLA,</b> le impusieron siete años de pena privativa de Libertad (...)” (Corte Suprema de</b></p>	<p>En atención al Acuerdo Plenario n.º4-2016/CJ-116 y el Principio de Proporcionalidad, la pena concreta debe ser disminuida a seis años.</p>	<p>La Suprema Corte, si bien cita al principio de proporcionalidad para reducir la pena por debajo del mínimo legal, no señala cuales son los criterios son los empleados para dicho fin.</p>

	<i>Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º64-2021/Lima, 2022)</i>		
Recurso de Nulidad n.º1899-2021/Lima	<p><b>“III. DECLARARON HABER NULIDAD</b> en pena de cuatro años de pena privativa de libertad <b>SUSPENDIDA</b>, por un periodo de prueba de tres años, impuesta al procesado Mauricio Daniel Moscoso Pinto; y <b>REFORMÁNDOLA</b>, le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, que se convierte a 208 jornadas de prestación de servicio a la comunidad (...)”</p> <p><i>(Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1899-2021/Lima, 2022)</i></p>	<p>El agente cuenta con responsabilidad restringida y no presenta antecedentes penales; el delito quedó en grado de tentativa, sin embargo, se debe tener en cuenta las circunstancias en las que se cometió el hecho; por lo que con base en los principios de humanidad, proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de las penas le corresponde la pena de cuatro años suspendida por tres años.</p>	<p>En esta ejecutoria suprema se puede apreciar claramente la aplicación del principio de proporcionalidad, por cuanto tiene en cuenta no solo las circunstancias del hecho y las del agente, sino también la finalidad de la pena a imponer y su repercusión en el agente.</p>

		No obstante, al ser el agente un condenado joven y ser reo primario, resulta beneficioso convertir la pena en jornadas de servicio a la comunidad.	
Recurso de Nulidad N°580-2020/Lima	<p><b>“NO HABER NULIDAD en la sentencia (...) que condenó a (...) Mario Anthony Ferro Vilca, como (autor) del delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de robo con agravantes, en perjuicio de Rosa Isabel Ayarquispe Mamani, e impuso a (...) Ferro Vilca, seis años de pena privativa de libertad. (...)”</b></p> <p><i>(Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º580-2020/Lima, 2022)</i></p>	<p>El agente alegó que la Sala Superior no tomó en cuenta las condiciones personales y que se traba de un reo primario al momento de determinar la pena privativa de la libertad, sin embargo, se advierte que se le impuso seis años de pena, por cuanto presenta responsabilidad restringida, al tener 20 años y 8 meses al momento de los hechos, además tuvo en cuenta las</p>	<p>En este caso, el Tribunal Supremo reconoce que para aplicación de la responsabilidad restringida se ha de tener en cuenta las condiciones personales del agente, lo que hace conjeturar la formación de criterios para su imposición, aun más cuando la pena fue reducida por la Sala Superior a la mitad del extremo mínimo de la pena abstracta.</p>

		circunstancias alegadas por el recurrente.	
Recurso de Nulidad N.º334-2020 / Lima	“(…) <i>declararon <b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que se le impuso a Moises Junior Gamboa Seminario <u>7 años</u> de pena privativa de libertad como autor del delito de robo con agravantes (...) y <b>REFORMÁNDOLA</b>, establecieron en <u>10 años</u> de pena privativa de libertad. (...)”</i> (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º334-2020/Lima, 2022)	Si bien la pena debió determinarse por debajo del mínimo legal, por tener el agente responsabilidad restringida, debió tenerse en cuenta las circunstancias en las que se cometió el hecho, por tanto, la pena de siete años de privación de la libertad debe ser corregida en diez años, al ser el Ministerio Público la parte recurrente.	En este pronunciamiento supremo, se advierte que toma en cuenta las circunstancias del hecho cometido como criterio determinante para la imposición de la pena concreta, razón por la cual, la pena impuesta por la Sala Superior es corregida, aumentando tres años a esta.

<p>Casación n.º1718- 2018/Ica</p>	<p>“(…) <b>REVOCARON</b> la sentencia de primera instancia (…) en el extremo que impuso al recurrente Marlon Anthony Yarma Quispe dieciséis años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva, (...) <b>REFORMÁNDOLA</b>, le impusieron diez años y cuatro meses de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Casación n.º1718-2018/Ica, 2022)</p>	<p>El <i>quantum</i> a disminuir por Responsabilidad Restringida sigue criterios racionales, más no responde a criterios, tasados o predeterminados, por lo que la pena privativa de la libertad debe ser reducida en dos años, para el delito de robo agravado.</p>	<p>En este caso, la Corte Suprema señala que se deben emplear criterios racionales para imponerse una pena concreta cuando estemos frente a un agente con responsabilidad restringida, empero deja un vacío en su motivación respecto a las circunstancias que valoró para reducir dos años de privación de la libertad.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º143-2020/Lima</p>	<p>“<b>II. HABER NULIDAD</b> en la propia (...) en la parte que impone a <b>RONALDO RAMÍREZ VÁSQUEZ</b> a seis años de la misma pena, que se computará una vez sea detenido.</p>	<p>De conformidad con el Principio de Proporcionalidad se debe tener en cuenta la gravedad de los hechos para reducir la pena por responsabilidad restringida, por lo</p>	<p>En este caso, se advierte que el Supremo Tribunal corrige la pena teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, así como las condiciones personales del</p>

	<p><b>REFORMÁNDOLA</b> en este extremo (...) a <b>RONALDO RAMÍREZ VÁSQUEZ</b> ocho años de la misma pena, (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º143-2020/Lima, 2022)</p>	<p>tanto, en el caso se advierte la presencia de coautoría y la presencia de cuatro agravantes específicas, pero una causa de disminución de la punibilidad (carencia de antecedentes penales), por lo tanto, la pena debe ser corregida.</p>	<p>agente; aspectos que permitirían apreciar la materialización del Principio de Proporcionalidad.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º973-2020/Lima Sur</p>	<p>“<b>I. HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el <u>extremo</u> que, por mayoría le impuso a <b>CRISTHIAN ANTONIO ARPI GOMEZ</b> ocho años de pena privativa de libertad como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de robo con agravantes, en</p>	<p>La Sala Superior si bien redujo cuatro años de pena privativa de la libertad al haber quedado el delito en grado de tentativa, la Corte Suprema considera que se debe bajar cuatro años por responsabilidad restringida, convirtiendo la pena en jornadas de</p>	<p>En este caso se aprecia que el Supremo Tribunal aplicó la reducción de la pena por responsabilidad restringida, sin embargo, no se especifica criterios sobre el cual se sustenta la reducción de cuatro años de privación de la libertad.</p>

	<p><i>perjuicio de Gustavo Benjamin Quiroz Medina.</i></p> <p><b>REFORMÁNDOLA,</b></p> <p><i>le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad, la que se convierte en doscientos ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad (...)"</i></p> <p><i>(Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º973-2020/Lima Sur, 2022)</i></p>	<p>prestación de servicios a la comunidad.</p>	
<p>Recurso de Nulidad n.º614/2020 Callao</p>	<p><b>"II. DECLARARON HABER NULIDAD</b> en la (...) sentencia en el extremo que impuso contra los encausados <i>Franco Alexis Luis Moreno y Máximo Ricardo Yupanqui Reyes quince años de pena privativa de libertad;</i> y,</p> <p><b>REFORMÁNDOLA,</b></p> <p><i>se impuso once años de</i></p>	<p>La Sala Superior no consideró ni aplicó la responsabilidad restringida, por cuanto los agentes al momento del hecho, tenían 18 y 19 años respectivamente, por lo que se debe imponer una pena de 11 años de privación de la libertad, considerando el bien</p>	<p>En esta ejecutoria suprema podemos apreciar que la Corte Suprema considera la aplicación de la responsabilidad restringida, reduciéndose un año de pena privativa de la libertad, empero si bien se precisa que</p>

	<p><i>pena privativa de libertad.” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º614-2020/Callao, 2022)</i></p>	<p>jurídico protegido y el impacto social del delito.</p>	<p>la reducción se hace en función al bien jurídico y el impacto social, no se aprecia en que grado se dio este último que implique la reducción de un año.</p>
<p>Recurso de Nulidad N°1190-2021 /Lima Norte</p>	<p><b>“II. HABER NULIDAD</b> en la pena impuesta de cinco años de pena privativa de libertad. <b>REFORMULÁNDOL A</b>, se le impuso cuatro años de pena privativa de libertad que <b>CONVIRTIERON</b> a doscientas ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1190-</p>	<p>Se presenta solo una circunstancia agravante específica (pluralidad de agentes) y dos circunstancias de disminución de punibilidad (tentativa y responsabilidad restringida). La Sala de mérito impuso la pena de seis años de privación de la libertad, por debajo del mínimo legal, reduciendo tres años por cada causal de disminución de la punibilidad; no</p>	<p>Podemos apreciar, en este caso que el razonamiento de la Corte Suprema obedece a un parámetro determinado para la imposición de la pena cuando se esté frente a causales que disminuyen la punibilidad, como es el caso de la responsabilidad restringida y tentativa, por tanto no hay mayor valor a las circunstancias del evento delictivo o aspectos</p>

	2021/Lima Norte, 2022)	obstante, se debe corregir a cuatro años por cada una de ellas, lo que implica la imposición de 4 años de privación de la libertad, sin embargo, atendiendo a los fines de la pena corresponde convertir la pena en jornadas de prestación de servicios a la comunidad.	personales del agente
Recurso de Casación n.º1076-2019/ Lambayeque	“(…) <b>REVOCARON</b> la sentencia de primera instancia en cuanto impuso a KEVIN JERSON CAJUSOL BANCES doce años de pena privativa de libertad; reformándola en este extremo: le <b>IMPUSIERON</b> nueve años de pena privativa de libertad (…)” (Corte Suprema de	Las instancias de mérito no emplearon la reducción de la pena por responsabilidad restringida, por lo que al ser una causal de disminución de la punibilidad siempre debe imponerse una pena por debajo del extremo mínimo legal, teniendo en	Del presente caso, podemos advertir criterios para la imposición de la pena por responsabilidad restringida, siendo estos la forma y circunstancias del hechos, así como la culpabilidad por el mismo; aspectos trascendentales que

	<i>Justicia de la República, Recurso de Casación n.º1076-2019/Lambayeque, 2022).</i>	cuenta la proporcionalidad de la pena, a la forma y circunstancias del evento delictivo, así como a los factores subjetivos presentes en dicho momento.	indicarían la imposición de una pena proporcional al daño o perjuicio cometido; por otro lado es de destacar que en su motivación el Supremo Tribunal, no establece limitación alguna para la reducción de la pena, empero rebaja solo tres años de privación de la libertad al extremo mínimo legal del delito.
Recurso de Nulidad n.º633-2020/Lima	<b><i>“HABER NULIDAD en la sentencia (...) en el extremo que impuso 9 años de pena privativa de libertad a LUIS HUMBERTO VICENTE RIVERA y GIANPIERRE JOSUÉ ROMERO LOZADA como coautores de la tentativa del delito de</i></b>	En primer lugar, se debe identificar la pena del delito de robo, el cual tiene una pena abstracta de tres a ocho años de pena privativa de la libertad, luego se debe verificar las circunstancias de disminución de la	La ejecutoria suprema bajo análisis, presenta una forma poco peculiar para determinar la pena, forma que estimo es errónea por cuanto nuestro ordenamiento jurídico establece el

	<p><i>robo con agravantes, en perjuicio de Mirian Yeraldin Cuba Cucho. Y REFORMÁNDOLA les impusieron cinco años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º633-2020/Lima, 2022).</i></p>	<p>punibilidad, en el caso en concreto se presenta tentativa y responsabilidad restringida, por lo que prudencialmente disminuyendo la pena debe imponerse dos años de privación de la libertad; no obstante, al apreciar la concurrencia de tres agravantes específicas del delito de robo agravado se debe adicionar la pena de un año de privación de la libertad por cada una de ellas, lo que implica la imposición de una pena de cinco años de privación de la libertad.</p>	<p>tipo penal de robo agravado como tipo penal autónomo, sobre el cual se deben subsumir los hechos a fin de identificar una pena concreta dentro de los parámetros que este impone, por lo que el proceder de la Corte Suprema afecta el Principio de Legalidad.</p> <p>Por otro lado, se considera la disminución de la pena en un año cuanto se presente la institución de responsabilidad restringida, empero dicho razonamiento no valora las circunstancias de los hechos o características personales del agente, lo que implica que dicha</p>
--	--	---	---

			reducción obedece a parámetros ya establecidos, del cual no se puede observar materialización del Principio de Proporcionalidad.
Recurso de Nulidad n.º996-2020/Lima Sur	<p><i>“Declarar <b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia conformada (...) en el extremo que le impuso nueve años y ocho meses de pena privativa de libertad a <b>RUTH YARIDA QUISPE ÁVILA</b> como coautora del delito contra el patrimonio, en la modalidad de tentativa de robo con agravantes, en perjuicio de Pedro Arturo Rosas Lima; (...) <b>REFORMÁNDOLA,</b> le impusieron a Ruth Yarida Quispe Ávila la pena de diez años de</i></p>	<p>La responsabilidad restringida es una circunstancia de disminución de punibilidad y no una circunstancia atenuante privilegiada como fue considerada por la Sala Superior, en ese sentido se debe corregir la pena impuesta, determinándose una pena de diez años de pena privativa de la libertad.</p>	<p>Esta ejecutoria suprema precisa la naturaleza de la institución de responsabilidad restringida para corregir la pena impuesta por la Sala Superior; sin embargo, en ella no se establecen criterios valorados para la determinación de la pena por debajo del mínimo legal.</p>

	<i>pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º996-2020/Lima Sur, 2022).</i>		
Recurso de Nulidad n.º1003-2020/Lima Norte	<p><b>“HABER NULIDAD</b> <i>en el extremo que se les impuso nueve años de pena privativa de libertad y</i></p> <p><b>REFORMÁNDOLA</b> <i>les impusieron ocho años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1003-2020/Lima Norte, 2022).</i></p>	Los agentes a la fecha de los hechos contaban con 19 y 18 años respectivamente, por lo que se debe imponer una pena de ocho años de privación de la libertad.	La Corte Suprema en esta ejecutoria suprema, reduce la pena en cuatro años por debajo del mínimo legal al ser de aplicación la responsabilidad restringida, de lo que se infiere una reducción totalmente tasada, sin que se tenga en cuenta el Principio de Proporcionalidad.
Recurso de Nulidad n.º49-2021/Lima	<b>“III. DECLARARON HABER NULIDAD</b> <i>en la citada sentencia en el extremo que impuso veintitrés años de pena privativa de libertad; y,</i>	El agente al momento de la comisión de los hechos contaba con veinte años de edad, por lo que	En ese caso, es de destacar el razonamiento que el Supremo Tribunal realiza para la imposición de la

	<p><b>REFORMÁNDOLA,</b> imponer diez años de pena privativa de libertad. (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º49-2021/Lima, 2022).</p>	<p>corresponde imponer una pena por debajo del mínimo legal; en ese sentido, atendiendo la concurrencia de las circunstancias específicas del delito y la atenuante de responsabilidad restringida, la pena impuesta de veintitrés años de privación de la libertad resulta ser desproporcionada por lo que se debe reformar a diez años de privación de la libertad.</p>	<p>pena, al valor las circunstancias específicas que se presentaron en la comisión del hecho, aspecto trascendental para poder rebajar la pena atendiendo a la gravedad del hecho cometido, empero no se observa que se haya tomado en cuenta la finalidad con la que se busca la imposición de la pena o los aspectos personales del agente con la privación de su libertad.</p>
<p>Casación n.º1067-2019/ Lambayeque</p>	<p>“(…) <b>REVOCARON</b> en cuanto al extremo de la pena, la sentencia (...) que le impuso (...) doce años de pena privativa de libertad y, <b>REFORMÁNDOLA,</b> le impusieron siete</p>	<p>Se aprecia que las instancias de mérito no aplicaron la institución de responsabilidad restringida, en ese sentido se debe rebajar la pena</p>	<p>En ese caso la Corte Suprema de Justicia, consideró aplicar la responsabilidad restringida, reduciendo el extremo mínimo en</p>

	<i>años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Casación n.º1067-2019/Lima, 2022).</i>	imponiendo una pena de siete años de privación de la libertad, en atención al Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad de la pena y los fines preventivos especiales y generales.	5 años; de lo cual es importante destacar la consideración que se le da a finalidad de la pena P el Principio de proporcionalidad, lo que hace inferir la valoración que hace la Corte Suprema de las circunstancias del hecho para imponer tal reducción.
Recurso de Nulidad n.º297-2020/Lima Sur	<i>“II. Declarar <b>HABER NULIDAD</b> en el extremo que le impuso ocho años de pena privativa de libertad, y <b>REFORMÁNDOLA</b>, le impusieron cinco años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Casación n.º297-2020/Lima Sur, 2022).</i>	Se debe tener en cuenta para rebajar la pena por debajo del mínimo legal por responsabilidad restringida, las condiciones personales del agente (instrucción secundaria y 19 años y 6 meses de edad), por lo que corresponde imponer una reducción de 5 años	El supremo tribunal, considera las condiciones del agente a fin de imponer una pena, lo cual permite inferir que indirectamente toma en cuenta la finalidad de la pena a imponer, aspecto sobre el cual puede materializarse el Principio de Proporcionalidad.

		de privación de la libertad.	
Revisión de Sentencia NCPP n.º238-2020/Ucayali	“(…) <b>declararon SIN VALOR</b> la referida sentencia de vista en cuanto confirmó la pena de doce años y, fijando la pena correspondiente, le <b>IMPUSIERON</b> ocho años de pena privativa de libertad (…)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Revisión de Sentencia NCPP n.º238-2020/Ucayali, 2022).	La reducción de la pena por la responsabilidad restringida, no responde a criterios legales, tasados o predeterminados, sino a la prudencia del juzgador, por lo que se debe rebajar la pena en cuatros años, por las circunstancias de los hechos.	Como se advierte del presente caso, al Corte Suprema descarta la limitación para aplicación de la responsabilidad restringida, señalando que estos responden a criterios racionales acorde al evento delictivo y circunstancias del agente para imponer una pena justa.
Recurso de Nulidad n.º1043-2020/Lima	“ <b>I. DECLARARON HABER NULIDAD</b> en la sentencia (…) <b>en el extremo</b> que impuso a <i>Cristhian Martín Alayo Bejarano</i> <b>nueve años</b> de pena privativa de libertad, y <b>REFORMÁNDOLA</b> le	El artículo 22 del Código Penal, no fija el quantum a disminuir la pena de privación de la libertad debajo del mínimo legal, debido a que se debe tener en cuenta para tales efectos los	En la ejecutoria suprema en comento, es de destacar que la Corte Suprema señala como un criterio para la imposición de un pena frente a la responsabilidad

	<i>impusieron seis años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1043-2020/ Lima, 2022).</i>	<p>aspectos específicos del caso en concreto, a fin de conseguir una pena proporcional, razonable y necesaria.</p> <p>En el caso, el agente tuvo 18 años de edad al momento de la comisión de los hechos, fue capturado en flagrancia, carecía de antecedentes penales y ha reiterado a lo largo del proceso su arrepentimiento.</p>	<p>restringida, la necesitada para su imposición, lo cual se encuentra vinculado a la finalidad que se persigue y los efectos de aquella en el agente, además que toma en cuenta las circunstancias del hecho así como del agente, tales como ser un reo primario y mostrar su arrepentimiento, aspectos trascendentales para la reinserción del pena en sociedad, en tal sentido,</p>
Casación n.º322- 2021/Tumbes	<i>“(…) <b>CASARON</b> la sentencia de vista únicamente en el extremo de la pena y, actuando como instancia, <b>REVOCARON</b> la</i>	<p>La pena por responsabilidad restringida no tiene un baremo definido, puesto que se trata de la discrecionalidad del</p>	<p>En esta ejecutoria suprema se aprecia claramente la valoración que se realiza a las circunstancias del hecho, el daño que</p>

	<p><i>sentencia de primera instancia (...) en cuanto a que impuso a los sentenciados José Alberto Reynoza Flores y Carlos Daniel Masías Culquicóndor doce años de pena privativa de libertad;</i></p> <p><b>REFORMÁNDOLA,</b></p> <p><i>les IMPUSIERON siete años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º332-2021/ Tumbes, 2022).</i></p>	<p>jugador en cada caso en concreto, atendiendo a las condiciones personales del agente, la gravedad del hecho, así como el daño que pueda ocasionar,</p> <p>En el caso en concreto, atendiendo lo antes señalado, y teniendo en cuenta que el agraviado pudo recuperar los bienes sustraídos, resulta prudente disminuir la pena de manera razonable, al ser el agente reo primario, con grado de instrucción de cuarto año de educación primaria, sin ocupación, lo que implicaría que una larga condena no ayude a</p>	<p>se produjo con tal evento delictivo, las condiciones del agente y con ello la viabilidad de reinsertarse en sociedad, aspectos trascendentales que permiten atender una pena justa y totalmente proporcionada.</p>
--	---	---	---

		reinsertarlo en la sociedad.	
Recurso de Nulidad n.º466-2020/Lima Sur	<p><b>“III. Declarar <i>HABER NULIDAD</i> en la referida sentencia, en el extremo que le impuso 10 años, 3 meses y 13 días de pena privativa de libertad efectiva a <b>LUIS ENRIQUE APAZA LOZA</b> como coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado; y <b>REFORMÁNDOLA</b> se le impone 6 años de pena privativa de la libertad efectiva (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º466-2020/Lima Sur, 2022).</b></p>	<p>La pena a imponer debe darse en el tercio inferior de la pena abstracta, al tener en consideración las condiciones personales, sociales y económicas del recurrente; empero, es de aplicación de la causal de disminución de la punibilidad por responsabilidad restringida, al tener el agente veinte años al momento de los hechos, además del beneficio procesal de conclusión anticipada, por lo que en atención al principio de proporcionalidad de las penas debe imponerse una pena</p>	<p>Como se aprecia, en esta ejecutoria suprema se toma en cuenta previamente a la aplicación de responsabilidad restringida, las circunstancias personales, sociales y económicas del agente, para luego advertir la presencia de una causal de disminución de la responsabilidad; lo que hace inferir que en esta última no se toman en cuenta las circunstancias primigenias antes anotadas, por lo cual implicaría que la pena cuando se presente responsabilidad restringida implique a una disminución</p>

		de seis años de privación de la libertad.	ya determinada independientemente del hecho o circunstancias adversas que se puedan dar en un caso en concreto, lo cual alejaría la materialización del Principio de Proporcionalidad.
Recurso de Nulidad n.º961-2020/Lima Sur	<b>“II. HABER NULIDAD en el extremo que, por mayoría, impuso 10 años de pena privativa de libertad y REFORMANDO le impusieron 7 años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º961-2020/ Lima Sur, 2022).</b>	Concurren dos causales de disminución de la punibilidad, responsabilidad restringida por tener el agente 19 años de edad y eximente imperfecta, por lo que se debe rebajar la pena aún por debajo de la pena impuesta por la Sala Superior.	En este caso, el Supremo Tribunal si bien aplica la responsabilidad restringida, no se advierte el quantum que disminuye por dicha causar, ni se advierte la valoración de circunstancias relativas al hecho y al agente, más que su edad.
Recurso de Nulidad n.º146-2021/Lima	<b>“II. HABER NULIDAD en el extremo de la referida</b>	El agente no cuenta con antecedentes penales, ni	La Corte Suprema ha reducido la pena en la presente

	<p><i>sentencia que impuso a (...) Michel Alberto Delgado Arévalo, ocho años de pena privativa de libertad.</i></p> <p><b>REFORMÁNDOLA</b></p> <p><i>impusieron a (...) Michel Alberto Delgado Arévalo, siete años de pena privativa de libertad (...)" (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º146-2021/ Lima, 2022).</i></p>	<p>policiales, el delito quedó en grado de tentativa, además de ser de aplicación la institución de responsabilidad restringida, corresponde imponer una pena por debajo del mínimo legal; atendiendo a que el hecho se ha realizado con la concurrencia de tres agravantes específicas se debe imponer una pena de siete años.</p>	<p>ejecutoria suprema, en cinco años de privación de la libertad, valorando la tentativa y la responsabilidad restringida, así como las circunstancias del hecho y las características personales del agente, aspectos que permiten imponer una pena proporcional.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º651-2021/ Lima</p>	<p><i>I. Declarar <b>NO HABER NULIDAD</b> en la sentencia conformada (...), por la que se condenó a Segundo Carlos Mozombite Fasabi como autor del delito tentado de robo con agravantes, en</i></p>	<p>El Colegiado Superior consideró las causales de disminución de la pena y las condiciones personales del agente, de la forma más beneficiosa, obteniendo cinco años de privación de</p>	<p>En este caso concurre dos causales de disminución de la punibilidad, por lo que se impone una pena de cinco años de pena privativa de libertad, como se advierte de la motivación de la</p>

	<p><i>perjuicio de Ofelia Elvira Manrique</i></p> <p><i>Luna, se le impuso cinco años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º651-2021/ Lima, 2022).</i></p>	<p>la libertad, debido a la concurrencia de tentativa y responsabilidad restringida.</p>	<p>ejecutoria suprema la sala de mérito tuvo en cuenta las circunstancias del hecho y del agente, lo que estaríamos frente a una pena proporcional.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º1662-2021/Lima Sur</p>	<p><b>“I. DECLARAR, NO HABER NULIDAD en la sentencia conformada (...) en el extremo que le impuso a Diego Ismael Maduro Escalona, 4 años con 3 meses y 13 días de pena privativa de libertad efectiva (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1662-2021/ Lima Sur, 2022).</b></p>	<p>La Sala Superior no vulneró los principios de igualdad, legalidad ni proporcionalidad, al imponer una pena de cuatro años con tres meses y trece días, al concurrir la presencia de tentativa y responsabilidad restringida.</p>	<p>Como se puede apreciar, en el presente caso existe una reducción de la pena en más de 8 años, ante la presencia de responsabilidad restringida y tentativa; debemos precisar que la reducción por quedar el delito en grado de tentativa es de cuatro años, al ser un tercio del extremo mínimo, lo que hace intuir que la reducción por</p>

			responsabilidad restringida implica una reducción mayor a cinco años. No debemos soslayar que, en la Ejecutoria Suprema no se advierte la valoración de otras circunstancias relativas al hecho, o condiciones del agente.
Recurso de Nulidad n.º454-2021-Lima	<p><i>“Declarar <b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que impuso a <b>Bryan Vladimir Quintanilla Aparco diez años de pena privativa de libertad al ser condenado como autor del delito de robo con agravantes, en perjuicio de Martín Gustavo Espinoza</b>; y en consecuencia,</i></p> <p><b>REFORMÁNDOLA,</b></p>	<p>Teniendo en cuenta que el agente tenía veinte años de edad al momento de los hechos y no contaba con antecedentes penales, así como advirtiendo el medio empleado y la recuperación de los bienes, es posible reducir prudencialmente la pena en dos años de privación de la punibilidad, en</p>	<p>En este caso se advierte la reducción del tiempo de privación de la libertad en dos años, reducción que se llega valorando las circunstancias del hecho y así como las condiciones personales del agente, aspectos que permiten aplica una pena proporcional</p>

	<i>le impusieron seis años y diez meses de privación de libertad (...)</i> ” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º454-2021/ Lima, 2022).	atención al principio de proporcionalidad y razonabilidad.	con los hechos cometidos.
Recurso de Nulidad n.º2297-2019/Lima Sur	<i>“I. Declarar <b>NO HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que le impuso a Salvador Roberto Gamarra Salazar, cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por el periodo de prueba de tres años, (...)”</i> (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º2297-2019/Lima Sur, 2022).	La Sala Superior, redujo cuatro años de la pena de privación de la libertad, por tentativa y cuatro años más por responsabilidad restringida lo cual es prudente.	La Corte Suprema, en esta ejecutoria suprema considera prudente la reducción que la Sala Superior realizó para imponer una pena concreta; empero, no se advierte de la motivación algún criterio del que se desprenda el porqué de tal prudencia.
Recurso de Nulidad n.º565-2020/ Lima	<i>“(…) <b>NO HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que impuso al sentenciado Luis</i>	La Sala Superior, valoró los presupuestos para fundamentar y determinar la pena	En este caso, la Corte Suprema considera adecuado el razonamiento en la determinación

	<p><i>Alberto Hipólito Palomino cinco años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º565-2020/Lima, 2022).</i></p>	<p>conforme al artículo 45 del Código Penal, tales como las condiciones personales del agente (grado de instrucción, edad, cultura, sociedad) y el daño producido por la actividad delictiva, por lo que señaló que es susceptible de readaptarse socialmente, por lo que, disminuyendo beneficios procesales de confesión sincera y conclusión anticipada, impuso una pena de cinco años.</p>	<p>judicial de la pena realizada por la Sala Superior, de lo cual podemos advertir la valoración de aspectos personales del agente para la determinación de una pena por debajo del mínimo legal.</p> <p>Un aspecto que no debemos soslayar es la valoración al grado de readaptación que puede tener el agente para tenerse en cuenta al momento de imponer la pena.</p>
<p>Casación n.º633-2020/ Lambayeque</p>	<p><i>“(…) CASARON la sentencia de vista (..) en el extremo en el que confirmó la pena privativa de libertad impuesta en la</i></p>	<p>Las instancias de mérito no tomaron en cuenta que el agente al momento de los hechos contaba con veinte</p>	<p>La Sala Suprema, en ese caso precisa que la reducción por responsabilidad restringida debe reducirse hasta un</p>

	<p><i>sentencia de primera instancia (...). En consecuencia, sin reenvío y actuando en sede de instancia, <b>REVOCARON</b> la sentencia de primera instancia en el extremo en el que impuso al sentenciado Carlos Daniel Vilchez Canaquire trece años de pena privativa de libertad; y, <b>REFORMÁNDOLA</b>, le impusieron la pena privativa de libertad de ocho años,” (Corte Suprema de Justicia de la República, Casación n.º633-2020/ Lambayeque, 2022).</i></p>	<p>años, por lo que era de aplicación la responsabilidad restringida; en ese sentido si bien la pena a imponer se encontraba en el tercio inferior, lo correcto es que se imponga una pena por debajo del mínimo legal por responsabilidad restringida, lo cual se debe reducir en un tercio, en atención al Principio de Proporcionalidad y la función que cumple la pena, se debe imponer una pena de ocho años de privación de la libertad.</p>	<p>aproximado de un tercio del mínimo legal, en atención al Principio de Proporcionalidad y funcionalidad de las penas, empero sin tener mayor incidencia en las circunstancias en que se produjo el hecho o las condiciones del agente impuso una pena de ocho años.</p> <p>De lo cual, podremos advertir que existiría una forma tazada para imponer una pena cuando se cuente con responsabilidad restringida, independientemente a las circunstancias y consecuencias que se desprendan del hecho delictivo, así como las condiciones</p>
--	--	--	---

			personales del agente y mucho más de los fines que se pretende alcanzar con la pena.
Recurso de Nulidad n.º251-2020/Lima	<p><b>“III. HABER NULIDAD en la (...) sentencia en el extremo que se le impuso a RÓMULO BRAYAN ESCALANTE TORRES siete años de pena privativa de libertad, REFORMULÁNDOL A le impusieron cinco años de pena privativa de libertad (...)”</b> (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º251-2020/Lima, 2022).</p>	<p>En el caso, existen dos circunstancias agravantes específicas del tipo penal; y, solo una causal de disminución de la punibilidad, la responsabilidad restringida del agente, por cuanto contaba con diecinueve años de edad al momento de la comisión del hecho, por lo que, considerando el Principio de Proporcionalidad, adicionando el beneficio premial por conclusión anticipada se le debe imponer una pena de</p>	<p>La Corte Suprema, señala la aplicación de la responsabilidad restringida con atención del Principio de Proporcionalidad; sin embargo, no precisa el <i>quantum</i> a reducir por esta causal de disminución de punibilidad, aspecto trascendental para conocer los criterios asumidos y la disminución correspondiente por cada uno de ellos, por cuanto en el caso en comento, se establece que la</p>

		cinco años de privación de la libertad.	pena impuesta deberá rebajarse a cinco años por responsabilidad restringida y la bonificación procesal de conclusión anticipada.
Recurso de Nulidad n.º 578-2020/Lima Norte	<i>“I. <b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que se le impuso a Junior Brayan Romani Capcha cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, convertida a doscientas ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad (...) en calidad de autor del delito contra el patrimonio-robo con circunstancias gravantes, en grado de</i>	El hecho delictivo se realizó durante la noche, con pluralidad de agentes y sobre un vehículo automotor. El agente no cuenta con antecedentes penales ni judiciales, además de ser aplicable la responsabilidad restringida, teniendo en cuenta que la determinación de la pena en este caso, no se agota en el Principio de Culpabilidad, sino	Es trascendental hacer hincapié que, en este caso la Corte Suprema toma en cuenta los fines que se pretende alcanzar con la pena a imponer, y en atención al Principio de Proporcionalidad, valora las circunstancias del hecho y la condición del agente, lo que con ello es posible

	<p><i>tentativa, en agravio de Irwin Javier Adriano García.</i></p> <p><b>REFORMANDO,</b> <i>le impusieron al mencionado procesado 6 años de pena privativa de libertad efectiva. ACLARANDO que se trata de un delito de robo consumado (...)</i>” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º578-2020 /Lima Norte, 2022).</p>	<p>se debe tener en cuenta también el Principio de Proporcionalidad, orientado a los fines de prevención general especial, la pena debe ser corregida en seis años de privación de la libertad.</p>	<p>arribar a una pena justa.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º61-2021/Lima Sur</p>	<p>“(…) <b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que impuso a Ronaldo Aldair Núñez Benítez doce años de pena privativa de libertad, al haber sido condenado como autor del delito de robo con agravantes, en perjuicio</p>	<p>El agente tenía diecinueve años de edad al momento de los hechos delictivos, carecía de antecedentes penales y no causó daño a la integridad física del agraviado, pese a tener un arma de fuego, por lo que en atención al principio de re</p>	<p>El Tribunal supremo, sin duda, en esta ejecutoria suprema da a conocer en su motivación los criterios determinantes para imponer una pena por debajo del mínimo legal, de los cuales es de resaltar</p>

	<p>de <i>Eoclíder Chumacero García</i>; <b>REFORMÁNDOLA</b> imponen nueve años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º61-2021 /Lima Sur, 2022).</p>	<p>razonabilidad y proporcionalidad, se debe reducir en tres años la pena por debajo del mínimo legal.</p>	<p>el de la afectación al agraviado.</p> <p>Siendo así, es posible señalar que con ello se busca la materialización del Principio de Proporcionalidad, lo cual resulta adecuado, para tales fines.</p>
<p>Casación n.º308-2020/Ica</p>	<p>“(…) <b>FUNDADO</b> el recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado <i>Edgar José Quispe Tasayco</i> (...) en consecuencia, <b>CASARON</b> la sentencia de vista (...) en cuanto a la pena impuesta y, actuando como instancia, <b>REVOCARON</b> la sentencia (...) en el extremo en el que desaprobó el acuerdo de conclusión anticipada e impuso</p>	<p>La Casación n.º66-2017/Junín estableció que la pena en el caso de causales de reducción de la punibilidad es de un tercio como límite máximo. En el caso en concreto, no está en duda que el agente contaba con diecinueve años de edad al momento de cometer el ilícito penal, por lo que estima que la pena a imponer por</p>	<p>La Corte Suprema en el presente caso, disminuye la pena en dos años sin indicar fundamentación alguna que permita apreciar los criterios empleados por el Supremo Tribunal para realizar dicha reducción, lo cual se aleja del principio de proporcionalidad.</p>

	<p>diez años y tres meses de pena privativa de libertad efectiva, y <b>REFORMÁNDOLA</b> aprobaron el acuerdo de conclusión anticipada y le impusieron a Quispe Tasayco ocho años y siete meses de pena privativa de libertad (...)”(Corte Suprema de Justicia de la República, Casación n.º308-2020 /Ica, 2022).</p>	<p>responsabilidad restringida quedaría en diez años. Además, al haberse el agente acogido a conclusión anticipada del proceso, corresponde la disminución de la pena, quedando en ocho años y siete meses de pena privativa de libertad.</p>	
<p>Recurso de Nulidad n.º1804-2021/ Lima Sur</p>	<p>“(…) <b>NO HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que condenando a Kevin Pedraza Cano como coautor del delito de robo con agravantes (...) en perjuicio de Raúl Percy Quispe Cañari, le impuso 6 años de pena privativa de libertad (...)”</p>	<p>La Sala Superior estimó disminuir la pena a ocho años de privación de la libertad al tener el agente 20 años al momento de los hechos, por tanto tener responsabilidad restringida, a lo que se redujo un año más por condiciones</p>	<p>En esta ejecutoria suprema podemos advertir que la Sala Superior disminuyó cuatro años por responsabilidad restringida, (tendencia que se ha podido apreciar en ejecutorias supremas antes analizadas), y redujo un año por</p>

	<p>(Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1804-2021/Lima Sur, 2022)</p>	<p>fácticas (Covid-19, hacinamientos en penales, situación económica), más la reducción de un séptimo por bonificación procesal de conclusión anticipada; la Corte Suprema no comparte la reducción de un año por condiciones fácticas, empero considera la reducción de cinco años por responsabilidad restringida, por cuanto con ello se atendería a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.</p>	<p>las circunstancias fácticas socio-económicas tanto del país como del agente, tales como la Pandemia, el hacinamiento en las cárceles y la situación económica, empero estos aspectos pudieron válidamente ser analizados para reducir la pena proporcionalmente debajo del mínimo legal por responsabilidad restringida, como hace la Corte Suprema de Justicia de la República, por cuanto dichas circunstancias no se ajustan a algún principio o regla procesal para disminuir la pena por debajo del</p>
--	--	---	---

			extremo mínimo legal.
Recurso de Nulidad n.º1005-2021/Loreto	“(…) <b>HABER NULIDAD</b> en la misma sentencia en el extremo que le impuso doce años de pena privativa de libertad y <b>REFORMÁNDOLA</b> en dicha parte le impusieron once años de pena privativa de libertad” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1005-2021/Loreto, 2022).	A la fecha de los hechos el agente contaba con 20 años y 3 meses de edad, por lo que corresponde aplicar responsabilidad restringida, empero al haberse verificado cuatro circunstancias agravantes específicas del delito de robo agravado, se debe disminuir un año por debajo del mínimo legal.	En este caso se advierte que, la Corte Suprema impone una pena por debajo del mínimo legal, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, al presentarse la concurrencia de cuatro agravantes específicas, circunstancias que denotan la búsqueda de una pena proporcional al hecho.
Recurso de Nulidad n.º1650-2021/Lima	“(…) <b>HABER NULIDAD</b> en la mencionada sentencia, en el <b>extremo</b> de la pena de nueve años impuesta al sentenciado <b>ALEXIS GIANPOL RAFAEL</b>	Con base al principio de proporcionalidad, al encontrarse el agente con responsabilidad restringida por tener veinte años de edad	El Supremo Tribunal, si bien reduce tres años de pena privativa de la libertad, por responsabilidad restringida, no precisa los criterios

	<p><b>HUAMANÍ.</b></p> <p><b>REFORMÁNDOLA,</b> <i>la disminuyeron a ocho años de privación de Libertad (...)</i>” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1650-2021/Lima, 2022).</p>	<p>al momento de la comisión de los hechos, corresponde imponer una pena de nueve años de privación de la libertad.</p>	<p>que motivaron tal graduación de la pena.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º110-2021/Lima Sur</p>	<p><b>“HABER NULIDAD</b> <i>en la misma sentencia (...) en el extremo de la imposición de doce años de pena privativa de libertad a Wilson Anthony Pérez Peña, como coautor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de Marco Antonio Vargas Dorregaray.</i></p> <p><b>REFORMÁNDOLA,</b> <i>se le impuso catorce años de pena privativa de libertad (...)</i>” (Corte Suprema de Justicia de la</p>	<p>La Sala Superior evidencia la concurrencia de agravantes específicas del primer y segundo párrafo del artículo 189 del Código Penal, por lo que la pena deberá imponerse dentro de los límites de veinte a treinta años, por lo que aplicando el sistema de tercios y advirtiendo solo la carencia de antecedentes penales la pena a imponer</p>	<p>La Corte Suprema en el presente caso en comentario, reforma la pena impuesta, no solo por el procedimiento seguido por la sala superior para imponerla, sino por la inaplicación de responsabilidad restringida; de lo cual un aspecto a destacar es que la pena concreta a imponer era la de 20 años, al ser el extremo mínimo del segundo párrafo del</p>

	<p><i>República, Recurso de Nulidad n.º 110-2021/Lima Sur, 2022).</i></p>	<p>corresponderá al tercio inferior, disminuyendo además la bonificación procesal por conclusión anticipada (tres años) y tres años más por las condiciones personales del agente, y dos años más por las pandemia de la Covid-19; lo cual, es incorrecto por cuanto no se debe aplicar sistema de tercios en agravantes específicas, ni estas deben ser mezcladas con agravantes generales, pues existe un criterio de exclusión entre ambas,</p> <p>El agente tenía 19 años de edad al</p>	<p>tipo penal de robo agravado, empero al ser de aplicación la referida causal de disminución de la punibilidad, la pena corresponderá imponerse debajo de este límite, en este caso se reduce cuatro años de privación de la libertad, aspecto que hace notar, en relación con otras ejecutorias supremas precedentemente analizadas que ello responde a parámetros ya tasados independiente a las circunstancias del hecho, consecuencias y/o aspectos personales dela gente que motiven una reducción mayor de la pena, atendiendo</p>
--	---	--	---

		<p>momento de la comisión del hecho, por lo que corresponde aplicar la disminución de la pena por responsabilidad restringida, por lo que considera ateniendo al principio de proporcionalidad la reducción de 4 años por dicha causal de disminución de la punibilidad.</p>	<p>a la finalidad que se busca con su imposición.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º778-2021/Lima Sur</p>	<p>“(…) <b>HABER NULIDAD</b> en la referida sentencia en el extremo que fijó doce años de pena privativa de libertad y <b>REFORMÁNDOLA</b> le impusieron ocho años de pena privativa de libertad (…)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso</p>	<p>La Sala Superior no aplicó la responsabilidad restringida, por lo que la pena debe imponerse debajo del extremo mínimo legal, por lo que en atención al principio de proporcionalidad se deben rebajar cuatro años de</p>	<p>La ejecutoria suprema en comentario, si bien reduce la pena en cuatro años de privación de la libertad por responsabilidad restringida, no se advierten los criterios de proporcionalidad en que se sustente</p>

	<i>de Nulidad n.º778-2021/Lima Sur; 2022).</i>	privación de la libertad.	dicha reducción, por el contrario se acoge a una reducción determinada, sin importar mayores circunstancias.
Recurso de Nulidad n.º1680-2021/Lima Sur	<i>“(…) <b>NO HABER NULIDAD</b> en la sentencia conformada (...) en el extremo que se le impuso a Jerson Antonio Inga Changano 5 años con 1 mes y 22 días de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1680-2021/Lima Sur; 2022).</i>	La Sala Superior estimó reducir en seis años la pena privativa de la libertad, al tener el agente responsabilidad restringida, razonamiento que comparte la Corte Suprema, por haber resultado racional y proporcional el quantum de reducción, y debido a que la aplicación de la figura de responsabilidad restringida no tiene un fundamento en el injusto penal sino en la evolución de la	Como se advierte, en el presente caso fue materia de cuestionamiento la aplicación de la responsabilidad restringida por la Sala Superior, por lo que hace bien la Corte Suprema en ratificar su aplicación, empero no debemos soslayar que para el caso que nos ocupa se redujo dos años de privación de la libertad por la referida causa de disminución de la punibilidad, adicionándose a ella la disminución por haber quedado el

		persona, por lo cual no se debe inaplicar.	delito en grado en tentativa y la bonificación procesal de conclusión anticipada, quedando en una pena de cinco años con un mes y veintidós días; por lo que, si bien la pena sería proporcional al hecho, por cuanto se tiene la concurrencia de tres agravantes específicas del tipo penal de robo agravado.
Casación n.º362-2022/ La Libertad	<i>“(…) <b>FUNDADO</b> el recurso de casación interpuesto por Luis Enrique Chicoma García (...); en consecuencia, <b>CASARON</b> la sentencia de vista en el extremo en el que</i>	El agente a la fecha de los hechos contaba con veinte años y cinco meses, por lo que debió reducirse la pena por debajo del mínimo legal conforme a la responsabilidad	En este caso si bien se aplica la responsabilidad restringida disminuyéndose dos años por debajo del extremo mínimo legal, empero si bien se expresa la

	<p><i>confirmó la pena de doce años de privación de libertad que se le impuso a LUIS ENRRIQUE CHICOMA GARCÍA al condenarlo como coautor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Onelia Tatiana Solís Saavedra y Michel Josefina Saavedra Vilchez.</i></p> <p><b>II. ACTUANDO</b> en sede de instancia, <b>REVOCARON</b> la sentencia de primera instancia y reformándola en este extremo le impusieron la pena de diez años de privación de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Casación n.º362-2022/ La Libertad, 2022).</p>	<p>restringida, por lo que, en atención al Principio de legalidad y proporcionalidad, se debe imponer una pena con base en el artículo 45-A segundo párrafo del Código Penal.</p>	<p>aplicación de los principios de legalidad y proporcionalidad, sobre este último no se expresan criterios que permitan ponderar ello.</p>
--	--	---	---

<p>Recurso de Nulidad n.º1949-2021/Lima</p>	<p>“(…) <b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia conformada (...) en el extremo que le impuso ocho años de pena privativa de libertad a <b>BRYAN SMITH VELÁSQUEZ PITA</b> como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de Joel Ricardo Villanzona Rezza, con lo demás que contiene.</p> <p><b>REFORMÁNDOLA,</b> le impusieron la pena de siete años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1949-2021/Lima Sur, 2022).</p>	<p>La Sala Superior, estimó reducir la pena privativa de libertad, al advertir que el agente tenía veinte años y cuatro meses al momento de los hechos, carecía de antecedentes penales y contaba con un menor hijo, además de considerar la concurrencia de las agravantes específicas del delito, así también disminuyó la bonificación procesal por haberse acogido a la conclusión anticipada del proceso, por lo tanto impuso una pena de ocho años de privación de la libertad; empero, el Supremo Tribunal</p>	<p>Como se aprecia, el Tribunal Supremo reduce la pena por responsabilidad restringida hasta un tercio del extremo mínimo de la pena abstracta; es decir, reduce cuatro años al extremo mínimo de 12 años del tipo pena.</p> <p>Es menester recalcar que la Corte Suprema, no cuestiona los criterios determinantes para la imposición de la pena por la Sala Superior, siendo estos las circunstancias y consecuencias del hecho delictivo y los aspectos personales del agente, de lo cual</p>
---	--	---	--

		<p>considera que debió por responsabilidad restringida disminuirse cuatro años, y por la bonificación procesal un año, lo que implicaría la imposición de una pena privativa de libertad de siete años.</p>	<p>podríamos advertir la búsqueda en la materialización del Principio de Proporcionalidad.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º1846-2021/Lima Este</p>	<p>“(…) <b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que le impuso a Jeysson Junior Flores Castillo 4 años de pena privativa de libertad efectiva, convertida a 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad; por el delito de robo con agravantes, en perjuicio de Noemi Cuellar Juárez;</p> <p><b>REFORMÁNDOLA,</b> le impusieron 6 años de</p>	<p>La Sala Superior en atención a la edad del agente, la trascendencia de su acción delictiva y los principios de proporcionalidad y humanidad, redujo ocho años por responsabilidad restringida, en consecuencia impuso 4 años de pena privativa de la libertad, convertida a prestación de servicios a la</p>	<p>En el presente caso que nos ocupa, apreciamos la corrección del <i>quantum</i> de la pena por parte de la Corte Suprema, ello en base a criterios observados por la sala de mérito para fundamentar la individualización de la pena, en la que se apreció que se tomó en cuenta las circunstancias del hecho y sus</p>

	<p><i>pena privativa de libertad efectiva (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1846-2021/Lima Este, 2022).</i></p>	<p>comunidad; no obstante, teniendo en cuenta la naturaleza del delito, las circunstancias en el que se cometió el Tribunal estima que no se encuentra justificada tal reducción, debiendo reducirse solamente seis años de pena privativa de la libertad.</p>	<p>consecuentes, así como aspectos personales del agente y sobretudo la finalidad que se pretende alcanzar con la pena impuesta al haberse convertido por jornadas de servicio a la comunidad; sin embargo, estos dos últimos aspectos no fueron tomados por el supremo tribunal, a pesar de ello, se advierte que la reducción de la pena fue hasta la mitad del extremo mínimo del delito de robo agravado.</p>
<p>Recurso de Nulidad n.º1485-2021/Lima</p>	<p>“(…) <b>HABER NULIDAD</b> en la sentencia (...) en el extremo que impuso a <i>Brayan Benito Izquierdo Castro</i> ocho años de pena privativa</p>	<p>Teniendo en cuenta que el agente tenía veinte años de edad y no contaba con antecedentes penales al momento de los hechos, así</p>	<p>Como se advierte de la ejecutoria suprema en comento, la Corte Suprema de Justicia de la República en este caso considera</p>

	<p><i>de libertad, al haber sido condenado como autor del delito de robo con agravantes, en perjuicio de Eduardo David Huayta Cuba; y en consecuencia, <b>REFORMÁNDOLA imponen seis años de privación de libertad</b> (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de Nulidad n.º1485-2021/Lima, 2022).</i></p>	<p>como advirtiendo el medio empleado y el no haber causado mayor daño físico o psicológico en el agraviado, es posible reducir prudencialmente la pena en cinco años de privación de la punibilidad, en atención al principio de proporcionalidad y razonabilidad.</p>	<p>correcto la reducción de la pena en cinco años, valorando las circunstancias personales del agente, así como las circunstancias en las que se llevó a cabo el evento delictivo, pero sobre todo las consecuencias que repercuten en la víctima, criterios que dotan de proporcionalidad la pena impuesta.</p>
<p>Casación n.º1239-2022/ La Libertad</p>	<p><i>“(…) <b>FUNDADO</b> el recurso de casación por el quebrantamiento de precepto constitucional, procesal y material, interpuesto por la defensa del encausado Jhon Anthony Cueva Chuan contra la sentencia de vista, (...)”</i></p>	<p>Debe censurarse la no aplicación de responsabilidad restringida por parte de las instancias de mérito; en tal sentido, corresponderá imponer una pena por debajo del mínimo legal,</p>	<p>En este caso, la Corte Suprema se expresa de forma muy concreta dando a conocer los criterios que permiten la imposición de una pena por debajo del mínimo legal al tener el agente</p>

	<p><b>CASARON</b> (...) la sentencia de vista, en el extremo que confirmó la pena privativa de libertad impuesta al recurrente Jhon Anthony Cueva Chuan, y actuando en sede de instancia,</p> <p><b>REVOCARON</b> la sentencia de primera instancia, (...) en el extremo que le impuso al recurrente Jhon Anthony Cueva Chuan doce años de pena privativa de libertad y,</p> <p><b>REFORMÁNDOLA,</b> le <b>impusieron</b> ocho años de pena privativa de libertad (...)” (Corte Suprema de Justicia de la República, Casación n.º1239-2022/ La Libertad, 2022).</p>	<p>siguiendo criterios racionales; en el caso en concreto, se tiene la no existencia de otra causa de disminución de la punibilidad distinta a la de responsabilidad restringida, por lo que debe reducirse cuatro años de pena privativa de la libertad, en atención al artículo VIII del Título Preliminar (Principio de alidad).</p>	<p>responsabilidad restringida, centrándose primordialmente en las circunstancias atenuantes o que disminuyan la responsabilidad restringida, de ello podemos advertir que, en este caso no se toma en cuenta las condiciones y/o cualidades del agente, así como la finalidad que la pena impuesta pretende alcanzar.</p>
--	---	---	--

## **OBSERVACIÓN:**

Habiéndose analizado las ejecutorias supremas precedentes, se puede advertir el interés y criterio investigativo que dio pie al presente trabajo, al evidenciar la no uniformidad de criterios en la Corte Suprema de Justicia de la República para aplicar la proporcionalidad al momento de imponer una pena por debajo del extremo mínimo legal en el delito de robo agravado, cuando el agente cuente con una edad entre 18 y 21 años (responsabilidad restringida), ello por cuanto alcanzar la proporcionalidad de la pena a imponer, responde a criterios o aspectos de valoración propios por parte del juzgador.

Al respecto, se puede advertir de las ejecutorias supremas precedentes, que en trece de ellas –Recurso de Nulidad n.º 1116-2021/Lima Sur, Recurso de Nulidad n.º1127-2021/Lima, Recurso de Nulidad n.º298-2020/Lima, Recurso de Nulidad n.º64-2021/ Lima Sur, Casación n.º1718-2018/Ica, Recurso de Nulidad n.º1003-2020/Lima Norte, Recurso de Nulidad n.º49-2021/Lima, Revisión de Sentencia NCPP n.º238-2020/Ucayali, Recurso de Nulidad n.º961-2020/Lima Sur, Recurso de Nulidad n.º1662-2021/Lima Sur, , Casación n.º308-2020/Ica, Recurso de Nulidad n.º778-2021/Lima Sur y Recurso de Nulidad n.º1680-2021/Lima Sur–, para imponer una pena por debajo del extremo mínimo legal, la Corte Suprema de Justicia de la República solamente ha valorado la edad del agente, sin tener en cuenta la forma en cómo se realizó el hecho (circunstancias agravantes específicas); de lo cual, es válido sostener que no se garantizaría la imposición de una pena proporcional al hecho, por cuanto si bien el artículo 22º del Código Penal otorga discrecionalidad al juez para imponer una pena por debajo del extremo mínimo legal, esta debe ser proporcional al hecho cometido.

Ahora bien, en el Recurso de Nulidad n.º565-2020/ Lima, se valoran las características personales del agente distintas a contar antecedentes penales, dichas características permiten al juez tener mayor noción de los aspectos socio-económicos que puedan haber motivado la comisión del ilícito penal; por su parte, en la Casación n.º1067-2019/ Lambayeque, se valora solamente la afectación causada a la víctima por el evento delictivo; empero, en el Recurso de Nulidad n.º110-2021/Lima Sur y en el Recurso de Nulidad n.º565-2020/ Lima se valoran ambas circunstancias (características personales del agente y el grado de afectación a la víctima).

Por otro lado, en otras siete ejecutorias supremas –Recurso de Nulidad n.º1173-2021/Lima, Recurso de Nulidad N.º334-2020 / Lima, Recurso de Nulidad n.º614/2020 Callao, Recurso de Nulidad n.º297-2020/Lima Sur, Recurso de Nulidad n.º1005-2021/Loreto y Casación n.º1239-2022/ La Libertad –, se toma en cuenta la forma en que se cometió el ilícito penal, y ello es importante por cuanto si nos remontamos al Capítulo precedente, podemos apreciar las diferentes agravantes específicas en las que se puede producir un hecho, por ejemplo no sería correcto que reciba la misma graduación de la pena un agente que cometió el ilícito de robo agravado a mano armada y con la participación de dos o más personas (conurrencia de dos agravantes), que cometer el ilícito penal durante la noche (conurrencia de una sola agravante).

Un aspecto que no debemos soslayar, es que, de aquellas, en el Recurso de Nulidad n.º297-2020/Lima Sur, además de las circunstancias en las que se cometió el hecho se valoran las características del agente, alcanzando una pena de cinco años de privación de la libertad, cuando el extremo mínimo legal era el de doce años. Por su parte, en el Recurso de Nulidad n.º1846-2021/Lima Este se han tomado en cuenta características personales del agente, el grado de afectación a la víctima y las circunstancias en que se cometió el hecho.

Por otro lado, se aprecia que en veinticinco ejecutorias supremas –Recurso de Nulidad n.º137-2022/Lima Norte, Recurso de Nulidad n.º 552-2020/Callao, Recurso de Nulidad n.º1899-2021/ Lima, Recurso de Nulidad n.º580-2020/Lima, Recurso de Nulidad n.º143-2020/Lima, Recurso de Nulidad n.º973-2020/Lima Sur, Recurso de Nulidad N.º1190-2021 /Lima Norte, Recurso de Casación n.º1076-2019/Lambayeque, Recurso de Nulidad n.º633-2020/Lima, Recurso de Nulidad n.º996-2020/Lima Sur, Recurso de Nulidad n.º1043-2020/Lima, Casación n.º322-2021/Tumbes, Recurso de Nulidad n.º466-2020/Lima Sur, Recurso de Nulidad n.º146-2021/Lima, Recurso de Nulidad n.º651-2021/ Lima, Recurso de Nulidad n.º454-2021-Lima, Recurso de Nulidad n.º2297-2019/Lima Sur, Casación n.º633-2020/Lambayeque, Recurso de Nulidad n.º251-2020/Lima, Recurso de Nulidad n.º578-2020/Lima Norte, Recurso de Nulidad n.º61-2021/Lima Sur, Recurso de Nulidad n.º1650-2021/Lima, Casación n.º362-2022/ La Libertad, Recurso de Nulidad n.º1949-2021/Lima, Recurso de Nulidad n.º1485-2021/Lima– se

ha valorado si el agente cuenta con antecedentes penales al momento de determinar la pena por debajo del mínimo legal, lo cual resulta de transcendental importancia, debido a que permite al juzgador apreciar que el agente es un reo primario que ha actuado con apego a la Ley antes del hecho ilícito cometido, por lo tanto es pasible de reinsertarse a la sociedad por cuanto comprende la coexistencia de la sociedad en cumplimiento de la ley; tanto más sí, en cuatro de aquellas ejecutorias supremas –Recurso de Nulidad n.º1899-2021/ Lima, Recurso de Nulidad n.º1190-2021 /Lima Norte, Recurso de Nulidad n.º1043-2020/Lima y Recurso de Nulidad n.º578-2020/Lima Norte– se han valorado, además los fines de la pena a imponer; con lo cual nos encaminaríamos en una pena justa, proporcional.

Cabe precisar que, en trece de aquellas ejecutorias supremas –Recurso de Nulidad n.º137-2022/Lima Norte, Recurso de Nulidad N°580-2020/Lima, Recurso de Nulidad n.º973-2020/Lima Sur, Recurso de Nulidad N°1190-2021/Lima Norte, Recurso de Nulidad n.º996-2020/Lima Sur, Casación n.º322-2021/Tumbes, Recurso de Nulidad n.º466-2020/Lima Sur, Recurso de Nulidad n.º651-2021/ Lima, Recurso de Nulidad n.º2297-2019/Lima Sur, Casación n.º633-2020/Lambayeque, Recurso de Nulidad n.º251-2020/Lima, Recurso de Nulidad n.º1650-2021/Lima y Recurso de Nulidad n.º1949-2021/Lima–, no se han valorado las circunstancias en las que se produjo el hecho, imponiéndose penas privativas de libertad teniendo en cuenta las características del agente o afectación a la víctima que haya podido causar la comisión del ilícito penal.

En ese sentido, sería conveniente considerar que alcanzar una pena proporcional estaría en función de tres criterios: 1) Características del agente, 2) Grado de afectación a la víctima y 3) Circunstancias en las que se produjo el hecho, aspectos que además toman en cuenta la finalidad preventiva de la pena a imponer, aún más cuando el delito de robo agravado (como se indicó en el Capítulo precedente) se encuentra sobrepenalizado.

## CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

### 4.1. Discusión de Resultados

**Sobre el objetivo: Analizar la configuración, marco punitivo y política criminal del delito de robo agravado en nuestro país.**

- *¿Cuál es la configuración del delito de robo agravado en nuestro país?*

El delito de robo agravado, es la acción mediante la cual una persona perturba a otra con miedo o intimidación para apropiarse de sus bienes muebles en todo o en parte, bajo circunstancias específicas estipuladas en el artículo 189° del Código Penal, de las cuales existen tres grados o niveles, agrupadas por el grado de afectación a los bienes jurídicos; cabe recalcar que, el ilícito penal de robo agravado es pluriofensivo, es decir, afecta a diversos bienes jurídicos, ya que si bien principalmente afecta en el patrimonio las circunstancias en las que se comete afectan otros, tales como la vida, integridad física o psicológica.

- *¿Cuál es el marco punitivo del delito de robo agravado en nuestro país?*

En el delito de robo agravado, de conformidad con el artículo 189° del Código Penal, se ha previsto para el de primer nivel de agravantes el marco punitivo comprendido entre 12 y 20 años de pena privativa de libertad, para el segundo grado de agravantes el comprendido entre 20 y 30 años de pena privativa de libertad, y para el tercer grado de agravantes la pena de cadena perpetua (35 años).

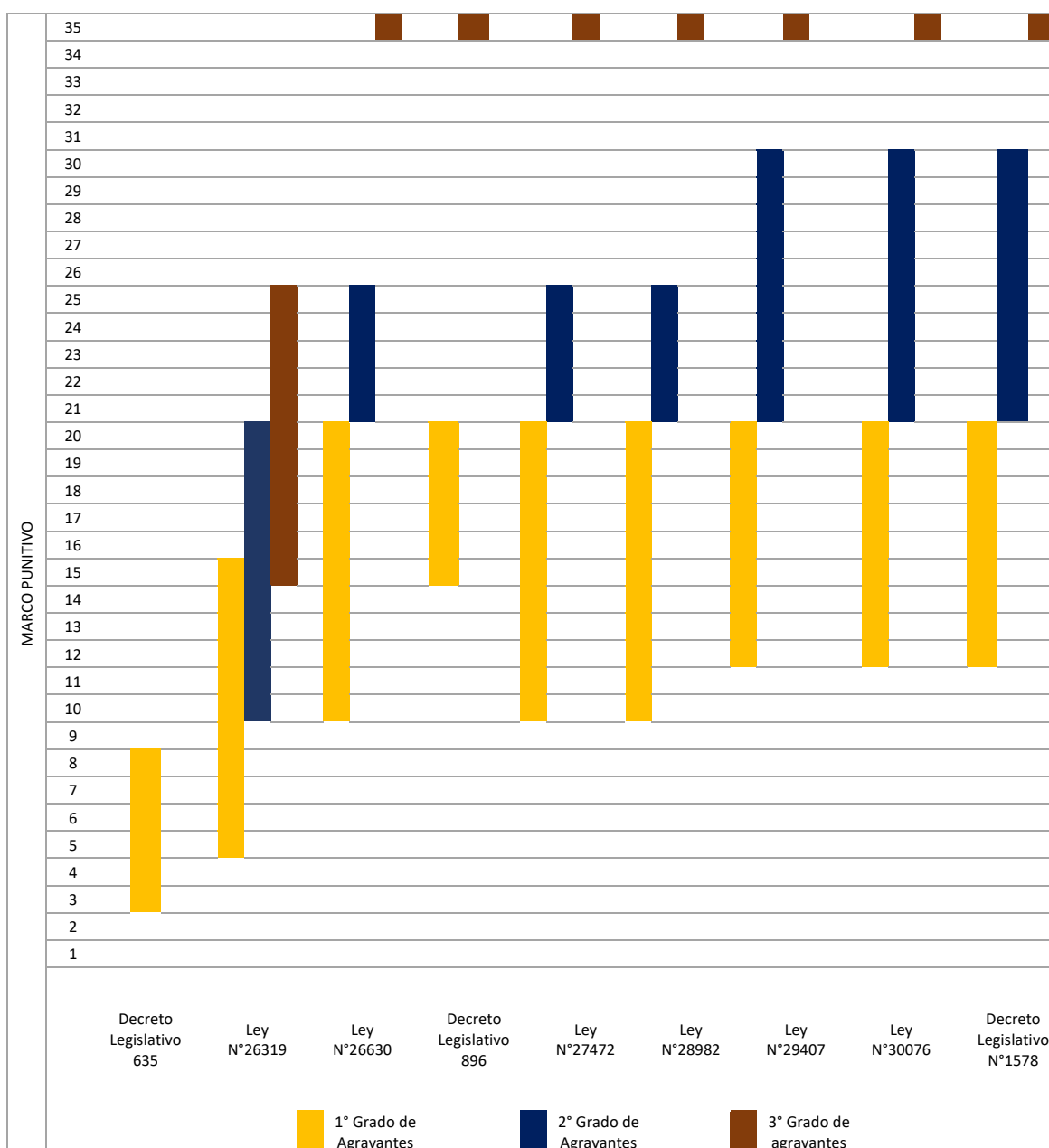
- *¿Cuál es la política criminal para el delito de robo agravado en nuestro país?*

De la historia legislativa del delito de robo agravado, expuesta y analizada en el Capítulo precedente de este trabajo de investigación, se advierten que la severidad de las penas y la ampliación del marco punitivo del delito en comento se motivó en el afán de combatir la inseguridad ciudadana generada por la tendencia comisiva de diversos delitos, entre ellos, el delito de robo agravado.

En ese sentido, se puede establecer que el legislador consideró como política criminal incrementar el marco punitivo del referido delito para combatir la inseguridad ciudadana que aqueja a la sociedad peruana, como se advierte del grafico que se expone a continuación:

**Gráfico n.º01:**

*Evolución legislativa del marco punitivo del delito de robo agravado en sus niveles de agravantes.*



Como se puede desprender del gráfico precedente, el marco punitivo para el primer grado de agravantes del delito de robo agravado aumentó paulatinamente, constituyendo en la actualidad, el extremo mínimo, cuatro veces del previsto inicialmente. Así también, se puede apreciar que el grado de agravantes aumentó, de las cuales se modificó paulatinamente la severidad de sus penas, y ello, por cuanto afectan en mayor grado a los bienes jurídicos protegidos, tales como la vida o la integridad física.

Por otro lado, cabe precisar que dicha política criminal, a generado que diversos delitos en los que el bien jurídico protegido es de mayor protección cuenten con marcos punitivos inferiores al del delito de robo agravado, como se advierte a continuación:

**Tabla n.º02:**

*Marco punitivo de delitos contra la vida y dignidad humana.*

<b>Delito</b>	<b>Bien jurídico protegido</b>	<b>Marco punitivo</b>
Homicidio simple (Artículo 106° del Código Penal)	La vida	De <u>6 a 20 años</u> .
Aborto sin consentimiento (Artículo 116° del Código Penal)	La vida	De <u>3 a 5 años</u> Si fallece la madre la pena será <u>no menor de 5 ni mayor de 10 años</u> .
Trata de personas (Artículo 116° del Código Penal)	La dignidad	De <u>8 a 15 años</u>

De lo cual, es posible inferir que el legislador se alejó de la proporcionalidad que debe existir en la pena por el hecho causado (Principio VIII del Código Penal), por cuanto si un agente roba un teléfono celular durante la noche tendrá una pena de 12 años, pero si una persona mata a otra sin mayor circunstancia agravante, tendrá una pena de 6 años; en tal sentido, el delito de robo agravado se encuentra sobrepenalizado.

Así también, el legislador en ejercicio de tal política criminal, restringió la aplicación de beneficios procesales, así como de causales de justificación, como es el caso de la responsabilidad restringida para diversos delitos, entre ellos el delito de robo

agravado, como se expuso en el Capítulo precedente. Frente a lo cual, es preciso indicar que el legislador confunde la gravedad del delito o sus características comisivas con la comprensión por la evolución o madurez del agente, por lo cual los órganos jurisdiccionales no aplican tal restricción al considerar que quebrante el principio—derecho de igualdad, como se aprecia en la doctrina legal del X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria (Acuerdo Plenario N°04-2016/CIJ-116).

- ***¿Es efectiva la política criminal para el delito de robo agravado en nuestro país?***

Como se analizó en el Capítulo II del presente trabajo y en la precedente interrogante, desde la entrada en vigencia del Código Penal, el legislador al ver la tendencia comisiva del delito de robo agravado, consideró como medida para evitar su comisión, elevar el marco punitivo previsto para el referido delito, sin embargo, dicha medida no tuvo resultados favorables ni disminuyó su comisión, por el contrario implicó nuevamente la modificación al marco punitivo, en diversas ocasiones, debido a que cada modificación implicaba los mismos fines obteniendo la misma consecuencia, no ser efectiva.

## **TOMA DE POSTURA**

En función a la configuración, marco punitivo y política criminal para el delito de robo agravado y su eficacia, corresponde tomar la siguiente postura: El delito de robo agravado es un delito contemplado en el artículo 189° del Código Penal, contando con un marco punitivo «sobrepenalizado» debido a que, la política criminal se enfoca en aumentar el marco punitivo para evitar su alta comisión delictiva, por cuanto genera inseguridad ciudadana; sin embargo, esta no cumple con su finalidad, por cuanto a pesar de que cada modificación a perseguido evitar su alta comisión delictiva, esta ha tenido como respuesta aumentar el marco punitivo nuevamente para tales fines, debido a su ineficacia.

**Sobre el objetivo: Determinar la aplicación del principio de proporcionalidad, en materia penal y su vinculación con la funcionalidad de la pena.**

- *¿Qué implica el principio de proporcionalidad en materia penal?*

El Principio de Proporcionalidad es utilizado al momento de constitucionalizar la restricción al ejercicio de un derecho fundamental, por cuanto implica que la restricción sea **Idónea**: Cuenten con un fin y que la medida sea adecuada para dicho fin; **Necesaria**: No existe otra medida restrictiva igualmente eficaz; y **Proporcional**: Relación razonable entre lo que se quiere alcanzar y la restricción del derecho.

En tal sentido, en materia penal el Principio de Proporcionalidad se encuentra en diversos momentos, por cuanto las medidas que se imponen, en aplicación del ejercicio punitivo del Estado, implican en muchos de los casos la restricción de diversos derechos, el más destacado es la restricción de la libertad personal, por consiguiente el Principio de Proporcionalidad está presente en la criminalidad primaria y secundaria, la primera ejercida por el legislador al momento de establecer un marco punitivo (proporcionalidad abstracta) y la segunda limitada al órgano jurisdiccional al momento de imponer una pena por la comisión de un ilícito penal (proporcionalidad concreta), tanto más si el Código Penal lo establece de tal forma, en su artículo VIII del Título Preliminar.

En tal razón, la **idoneidad** al momento de imponer una pena está relacionada al Principio de Culpabilidad, por cuanto con el referido Principio se atribuye un hecho delictivo a una persona en concreto, así como la consecuencia jurídica preestablecida en el Código Penal; constituyendo el fin de la medida, atendiendo además las necesidades de prevención. En cuanto a la **necesidad**, se valora la consecuencia jurídica que pueda ser aplicable al caso en concreto; es decir, si corresponde imponer una pena o no, y de ser el caso, qué tipo de pena, buscando sin duda que ella sea totalmente eficaz para los fines de prevención que se persiguen con su imposición. Y, por último, en la **proporcionalidad en sentido estricto**, se analiza la relación de la restricción de la libertad personal con los hechos causados, así como las circunstancias que se presenten.

- *¿Cómo se vincula la funcionalidad de la pena con el principio de proporcionalidad?*

El ejercicio punitivo de un Estado, ha tomado en cuenta postulados filosóficos, los cuales han ido evolucionando a lo largo de los años, ya que inicialmente imponer una pena representaba solamente un castigo (Teorías Absolutas de la pena), posteriormente se identificó que la pena impuesta también puede perseguir otros fines (Teorías Relativas de la pena), tales como disuadir la comisión de nuevos delitos en la sociedad (Prevención General) preservando la fidelidad al derecho (Prevención General Positiva) o atemorizándola con su aplicación (Prevención General Negativa), así también enfocada tan solo en el agente que cometió el ilícito penal (Prevención Especial) debido a que se busca su resocialización (Prevención Especial Positiva) o su aislamiento de la sociedad (Prevención Especial Negativa); aspectos que han sido abordados en el Capítulo precedente.

En ese sentido, en atención al inciso 22° del artículo 139° de la Constitución Política, en el que se establece la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad como objetivo del régimen penitenciario, y el artículo IX de Título Preliminar del Código Penal, que establece la función preventiva, protectora y resocializadora, se puede sostener que nuestro ordenamiento jurídico se circunscribe a Teorías Relativas de la pena, en estricto a fines preventivos especiales de la pena.

En ese sentido, restringir la libertad personal por un periodo determinado ante la comisión de un ilícito penal, tiene por finalidad reeducar al penado para que en un futuro no vuelva a cometer ilícitos penales, finalidad que debe tenerse en cuenta y valorarse al momento de imponerse una pena, puesto que con dicho proceder se garantiza la aplicación del Principio de Proporcionalidad, allí su vinculación.

## **TOMA DE POSTURA**

Como se advierte, la aplicación del Principio de Proporcionalidad en la determinación de la pena es trascendental, porque valora la restricción de la libertad individual a imponer (consecuencia jurídica) con los hechos del evento delictivo y las circunstancias que se presenten, valoración que circunscribe en la finalidad que el ordenamiento jurídico le asigna, logrando imponer una pena justa.

**Sobre el objetivo: Establecer la falta de uniformidad en los criterios utilizados para la determinación de una pena concreta por debajo del extremo mínimo legal, cuando el agente tenga entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado.**

- ***¿Cuáles son los criterios utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la República?***

De las cincuenta ejecutorias supremas que forman parte de la muestra de esta investigación, se advierte que no existen criterios en la Corte Suprema de Justicia de la República para imponer una pena cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad (responsabilidad restringida), puesto que el Código Penal prevé la imposición de la pena por debajo del extremo mínimo legal a discrecionalidad del juzgador, cuando se presente dicha circunstancia; si bien, en algunas de ellas se hace referencia al Principio de Proporcionalidad, no se especifican que criterios son valorados bajo dicho principio, como se advierte a continuación:

**Tabla n.º03:**

*Criterios asumidos por la Corte Suprema de Justicia de la República para imponer una pena por debajo del mínimo legal cuando el agente cuente con una edad entre 18 y 21 años.*

<b>Criterios</b>	<b>Nº de Ejecutorias Supremas</b>
No se valora ninguna circunstancia más que la edad del agente (entre 18 y 21 años).	13
Se valoran solamente características personales del agente distintas a la presencia de antecedentes penales.	1
Se valora solamente la afectación o daño producido a la víctima.	2
Se valoran solamente las circunstancias en las que se cometió el hecho	6

Se valoran las circunstancias en las que se cometió el hecho y las características personales del agente distintas a la presencia de antecedentes penales.	1
Se valora el grado de afectación a la víctima y las características personales del agente distintas a la presencia de antecedentes penales.	1
Se valoran las circunstancias en las que se cometió el hecho, las personales del agente distintas a la presencia de antecedentes penales y el grado de afectación o daño a la víctima.	1
Se valoran solamente la presencia de antecedentes penales, como características personales del agente.	5
Se valoran la presencia de antecedentes penales y características personales del agente, distintas a esta.	4
Se valoran la presencia de antecedentes penales y las circunstancias en las que se cometió el hecho.	5
Se valoran la presencia de antecedentes penales, características personales del agente distintas a la presencia de antecedentes penales y las circunstancias en las que se cometió el hecho.	2
Se valoran la presencia de antecedentes penales y el grado de afectación o daño a la víctima.	0
Se valoran la presencia de antecedentes penales, características personales del agente distintas a la presencia de antecedentes penales y el grado de afectación o daño a la víctima.	1
Se valora la presencia de antecedentes penales, la forma en que se cometió el hecho y el grado de afectación o daño a la víctima	4
Se valora la presencia de antecedentes penales, características personales del agente distintas a la presencia de antecedentes	4

penales, la forma en que se cometió el hecho y el grado de afectación o daño a la víctima	
---	--

Como se advierte, son distintos los criterios que las ejecutorias supremas analizadas exponen, para la imposición de una pena por debajo del mínimo legal, en atención a la responsabilidad restringida con la que cuenta el agente.

- *¿Cuál es la consecuencia de no tener criterios definidos?*

La consecuencia de no tener criterios definidos para imponer una pena por debajo del mínimo legal por responsabilidad restringida, tiene por consecuencia la desconfianza del agente, víctima y comunidad jurídica en la forma de imponer una pena concreta, por cuanto si bien dicha imposición responde a la discrecionalidad del juzgador, esta debe estar ajustada a criterios racionales, atendiendo aún más el delito sobrepenalizado y la finalidad que se busca con la imposición de una pena en nuestro ordenamiento jurídico.

## **TOMA DE POSTURA**

La Corte Suprema de Justicia de la República, no cuenta con criterios uniformes para imponer una pena por debajo del mínimo legal, cuando el agente tenga entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado, ya que, en gran parte de las ejecutorias supremas analizadas solo toma en cuenta la edad del agente para rebajar la pena, mientras que en otras ejecutorias se valoran otros criterios, tales como los antecedentes penales, las circunstancias en las que se produjo el hecho, el grado de afectación a la víctima o las condiciones personales con las que cuente el agente o hayan podido provocar la comisión del evento delictivo.

**Sobre el objetivo: Proponer el uso de criterios uniformes para la determinación de la pena concreta por debajo del extremo del mínimo legal, cuando el agente tenga entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado.**

- ***¿Qué criterios se deben tener en cuenta al momento de determinar la pena concreta?***

Se puede advertir del análisis total de las ejecutorias supremas que forman la muestra del presente trabajo, que una pena proporcional estaría en función de tres criterios: 1) Características del agente, 2) Grado de afectación a la víctima y 3) Circunstancias en las que se produjo el hecho; aspectos que además toman en cuenta la finalidad preventiva de la pena a imponer, aún más cuando el delito de robo agravado (como se indicó en el Capítulo precedente) se encuentra sobrepenalizado.

El criterio referido a las **características del agente**, está vinculado a aquellas circunstancias que hayan motivado al agente a cometer el ilícito penal, tales como aspectos socioeconómicos, educativos, culturales y/o de sus costumbres, así como la carencia de antecedentes penales. En cuanto al **grado de afectación a la víctima**, este criterio como se indica está ligado al daño que se provocó a la víctima a causa del evento delictivo. Y, con el criterio de **circunstancias en las que se produjo el hecho**, se analizan las agravantes con las que se cometió el hecho, a fin de que sean tomadas en cuenta al momento de imponer una pena, porque no será lo mismo que si el delito de robo agravado se comete con la concurrencia de una sola agravante que con la concurrencia de tres o cuatro agravantes.

En ese sentido, dichos criterios serían analizados en el último estadio del Principio de Proporcionalidad, y con ello se alcanza una pena justa, que además de ser proporcional al hecho causado, se enmarca en los fines de la pena que nuestro ordenamiento jurídico prevé.

- ***¿Cuál es la consecuencia de tener criterios definidos?***

La consecuencia de tener criterios definidos para imponer una pena por debajo del mínimo legal, cuando el agente tenga una edad comprendida entre 18 y 21 años de edad, permite arribar a una pena justa, aún más cuando el delito de robo agravado, es un delito sobrepenalizado.

## TOMA DE POSTURA

El juzgador al momento imponer una pena por debajo del extremo mínimo legal, cuando el agente tiene una edad comprendida entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado, deberá aplicar los siguientes criterios: 1) Características del agente, 2) Grado de afectación a la víctima y 3) Circunstancias en las que se produjo el hecho, por cuanto no solo se alcanza una pena justa, sino que también se cumple con los fines de la pena establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

### 4.2. Resultado de validación de hipótesis

Respecto a la variable independiente:

*Determinación judicial de la pena, en el delito de robo agravado, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad.*

Inicialmente, teniendo en cuenta la función que cumple en la investigación la variable independiente, se tomó como tal a la “*Determinación judicial de la pena, en el delito de robo agravado, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad*”, al contener la causa del problema de la investigación. re de precisar que, su validez se encuentra en la hipótesis, al haberse tomado en cuenta para su construcción; además que de los objetivos específicos se advierten que estos se centran en dicha variable como causa del problema planteado.

Del desarrollo de la investigación, se advirtió la no uniformidad de criterios por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República, para la determinación judicial de la pena cuando el agente tiene una edad entre 18 y 21 años, debido a que la pena correspondiente debe imponerse por debajo del mínimo legal, en atención a la aplicación de la responsabilidad restringida que tiene el agente; análisis que fue llevado a cabo en referencia al delito de robo agravado, por cuanto la política criminal para el referido delito ha llevado a «sobrepenalizarlo».

En tal sentido, la variable queda validada en la siguiente afirmación:

No existen criterios uniformes en la determinación judicial de la pena, para imponer una pena por debajo del mínimo legal, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado.

Respecto a la variable dependiente

*Proporcionalidad de las Penas.*

En cuanto a la variable dependiente, entendida como las consecuencias que recaen de la variable independiente, se tomó en la presente investigación a la “*Proporcionalidad de las Penas*”.

De la investigación, se obtiene que al no existir uniformidad de criterios por parte del órgano jurisdiccional para imponer una pena por debajo del extremo mínimo legal cuando el agente cuente con una edad entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado, se tendrá como consecuencia la inaplicación del Principio de Proporcionalidad.

Por cuanto, el referido principio se encuentra contemplado en el Artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, estableciendo que la pena a imponer no debe sobrepasar los hechos cometidos; es decir, debe haber una relación entre ambos, lo cual es posible alcanzar si el órgano jurisdiccional al momento de imponer una pena, toma encuentra circunstancias que hagan sopesar el *quantum* de la restricción de la libertad con los hechos delictivos que causó el agente, a fin de alcanzar una pena justa, debido a que como se ha evidenciado en el desarrollo de la investigación son disimiles los criterios valorados por la Corte Suprema de Justicia de la República lo que hace una determinación de la pena espontanea, e incluso, en algunos casos existe una carencia de los mismos, lo cual supone la imposición de una pena de forma mecanizada.

En tal sentido, la variable queda validada en la siguiente afirmación:

No se aplica el Principio de Proporcionalidad si la pena se impone de forma mecanizada o espontáneamente, sin que medien circunstancias que puedan ser valoradas por el juzgador, tales como las circunstancias establecidas en las líneas precedentes.

#### 4.3. Contrastación y validación de hipótesis

Para contrastar y la calidad la hipótesis se deben unificar las afirmaciones de las variables antes discutidas para ser comparada con la hipótesis inicial, de la siguiente manera:

Tabla N.º04:

*Contrastación y validación de la hipótesis*

HIPÓTESIS INICIAL	HIPÓTESIS CONCLUSIVA
Si no se tienen criterios para la determinar judicialmente la pena por debajo del mínimo legal cuando el agente tiene una edad comprendida entre los 18 y 21 años, en casos de delito de robo agravado, entonces no se observa la aplicación del Principio de Proporcionalidad.	La no existencia de criterios uniformes en la determinación judicial de la pena, para imponer una pena por debajo del mínimo legal, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado; indica que, no se aplica el Principio de Proporcionalidad, ya en que la pena se impone de forma mecanizada o espontáneamente, sin que medien circunstancias que puedan ser valoradas por el juzgador, tales como las referidas al agente, al hecho y a la víctima.

Como se aprecia de la contrastación de la hipótesis inicial y la hipótesis conclusiva, se tiene un resultado positivo, por lo que corresponde hacer las conclusiones de la investigación.

## CONCLUSIONES

**PRIMERO.** La no existencia de criterios uniformes en la determinación judicial de la pena, para imponer una pena por debajo del mínimo legal, cuando el agente tiene entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado; indica que, no se aplica el Principio de Proporcionalidad, ya que la pena se impone de forma mecanizada o espontáneamente, sin que medien circunstancias que puedan ser valoradas por el juzgador, tales como las referidas al agente, al hecho y a la víctima.

**SEGUNDO.** El delito de robo agravado es un delito contemplado en el artículo 189° del Código Penal, contando con un marco punitivo sobrepenalizado debido a que, la política criminal se enfoca en evitar la alta comisión del referido ilícito penal; sin embargo, esta no cumple con su finalidad, por cuanto a pesar de que cada modificación a perseguido evitar su alta comisión, esta ha tenido como respuesta aumentar el marco punitivo nuevamente para tales fines, debido a su ineficacia.

**TERCERO.** La aplicación del Principio de Proporcionalidad en la determinación de la pena es trascendental, porque valora la restricción de la libertad individual a imponer, con los hechos del evento delictivo y las circunstancias que se presenten, valoración que circunscribe en la finalidad que el ordenamiento jurídico le asigna a la pena, logrando imponer con ello, una pena justa.

**CUARTO.** La Corte Suprema de Justicia de la República, no cuenta con criterios uniformes para imponer una pena por debajo del mínimo legal, cuando el agente tenga entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado, ya que, en gran parte de las ejecutorias supremas analizadas solo se toma en cuenta la edad del agente para rebajar la pena, mientras que en otras ejecutorias se valoran otros criterios, tales como los antecedentes penales, las circunstancias en las que se produjo el hecho, el grado de afectación a la víctima o las condiciones personales con las que cuente el agente o hayan podido provocar la comisión del evento delictivo.

**QUINTO.** El juzgador al momento imponer una pena por debajo del extremo mínimo legal, cuando el agente tiene una edad comprendida entre 18 y 21 años de edad, en el delito de robo agravado, deberá aplicar los siguientes criterios: 1) Características del agente, 2) Grado de afectación a la víctima y 3) Circunstancias en las que se produjo el hecho, por cuanto no solo se alcanza una pena justa, sino que también se cumple con los fines de la pena establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

## RECOMENDACIONES

1. La aplicación del Principio de Proporcionalidad en la determinación judicial de la pena debe ser obligatoria, por cuanto mediante aquel se permite alcanzar una pena justa, proporcionada con el hecho cometido.
2. La política criminal de combatir el alto índice comisivo de un ilícito penal, no debe suponer la ampliación del marco punitivo, llegando a sobrepenalizar el delito, debido a que afecta la funcionalidad de la pena y fomenta la inaplicación del Principio de Proporcionalidad en su determinación judicial.
3. Al aplicar el Principio de Proporcionalidad, se debe tener en cuenta la finalidad que persigue la imposición de una pena, por cuanto materializará la imposición de una pena justa al penado.
4. La valoración de criterios en la determinación judicial de la pena, no deben responden a parámetros ya fijados o determinados para cada uno de ellos, por el contrario, deben estar circunscritos a cada caso en concreto, atendiendo a la alta prudencia del juzgador.
5. Los criterios propuestos a valorar por el juzgador, al momento de imponer una pena por debajo del extremo mínimo legal, deben ser valorados teniendo en cuenta los fines preventivos que persigue la imposición de la pena, con la finalidad de garantizar la aplicación del Principio de Proporcionalidad, y por consiguiente alcanzar una pena justa.

## BIBLIOGRAFÍA

### LIBROS:

- Aranzamendi, L. y Humpiri Núñez, J. *Ruta para hacer la tesis en derecho*. Editora Jurídica Grijley. Lima, 2021.
- Bacigalupo Zapater, Enrique. *Manual de Derecho Penal*. Editorial: Temis. Lima, 1984
- Bramont-Arias Torres, Luis Alberto. *Manual de Derecho Penal. Parte General*. Editorial: San Marcos. Segunda Edición. Lima, 2002.
- Bramont-Arias Torres, Luis Alberto y García Cantizano, María del Carmen. *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*. Editorial: San Marcos. Sexta Edición. Lima, 2002.
- Cancho Espinal, Ciro. *Tractus sobre la pena judicial exacta*. Lima, 2023.
- Creus, Carlos. *Derecho Penal. Parte especial*. Editorial: Astrea. Volumen I. Buenos Aires, 1998.
- Gaceta Jurídica. *Código Penal Comentado*. Editorial: Gaceta Jurídica. Lima, 2004.
- Gaceta Penal. *Determinación Judicial de la Pena. Nuevos Criterios*. Editorial: Gaceta Jurídica. Lima, 2015
- García Caverro, Percy. *Derecho Penal. Parte General*. Editorial: Ideas. Tercerssa edición corregida y actualizada. Lima, 2019
- Gómez Marín, Manuel y Gil y Gomez, Pascual. *Cuerpo del Derecho Civil. Digesto, Código, Novelas e Institutas de Justiniano*. Editorial: Ramón Vicente. Madrid, 1873.
- Guevara Vásquez, Iván Pedro. *La Determinación Judicial de la Pena Concreta. La Rega de Tercios y Operaciones de Tipo Objetivo y Tipo Subjetivo*. Gamarra Editores. Lima, 2021.
- Jakobs, Günter. *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*. Ediciones Jurídicas y Sociales Marcial Pons. Madrid, 1997.
- La Ley. *Codigo Penal: Comentado y Anotado: Parte Especial (art. 79 a 306)*. La Ley. Buenos Aires, 2004.

Luzón Peña, Diego Manuel. *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*. Editorial: Tirant lo Bianch. Valencia, 2012.

Mir Puig, Santiago. *Derecho Penal. Parte General*. Editor: Reppertor. Bcelona, 2006.

Muñoz Conde, Francisco. *Introducción al Derecho Penal*. Editorial: Euros Editores. Buenos Aires, 2001.

Muñoz Conde, Francisco. *Derecho Penal. Parte Especial*. Editorial: Tirant lo Blanch. Tercera Edición. Valencia, 2015.

Prado Saldarriaga, Víctor Roberto. *Consecuencias Jurídicas del Delito. Giro Punitivo y Nuevo Marco legal*. . Editorial: IDEMSA. Lima, 2016.

Reátegui Sánchez, James. (2019). *Código Penal Comentado*. Editorial: Ediciones Legales. Volumén I. Lima, 2019.

Roxin, Claus. *Derecho penal. Parte general*. Editorial: Civitas. España, 1997.

Salinas Siccha, Ramiro. *Derecho Penal. Parte Especial*. Editorial: Iustitia. Volumen I. Lima, 2019.

Villavicencio Terreros, Felipe. *Derecho Penal Parte General*. Editorial: Grijley. Lima, 2019.

## REVISTAS:

Barnes, Javier. “*El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar*”. Cuadernos de Derecho Público. Número 5. Madrid, 1998. Págs. 16-49.

Castillo Córdova, Luis. Reporistorio Institucional PIRHUA. “*El Principio de Proporcionalidad en el Ordenamiento Jurídico Peruano. Especial Referencia al Ámbito Penal*”. Tendencias Modernas del Derecho. Trujillo, 2004. Págs. 155-180.

Rojas, Ivonne. “*La proporcionadidad en las penas*”. El ilícito y su castigo. Reflexiones sobre la cadena perpetua, la pena de muerte y la idea de sanción en el derecho. México, 2009. Págs. 275-286.

## PÁGINA WEB

<https://dle.rae.es>. “*Diccrinario de la lengua española, 23.7*”. 14 de febrero de 2024.

<https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/search>. “*Proyectos de Ley. Congreso de la República del Perú*”. 02 de abril de 2024.

<https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/resultado.xhtml#no-back-button>. “*Jurisprudencia Nacional Sistematizada. Corte Suprema de Justicia de la República*”. 25 de mayo de 2024.

<https://jurisprudencia.sedetc.gob.pe/sistematizacion-jurisprudencial/>. “*Buscador de Jurisprudencia. Tribunal Constitucional*”. 18 de mayo de 2024.